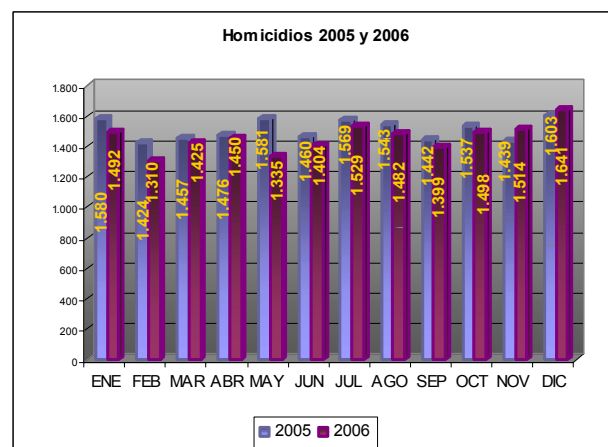
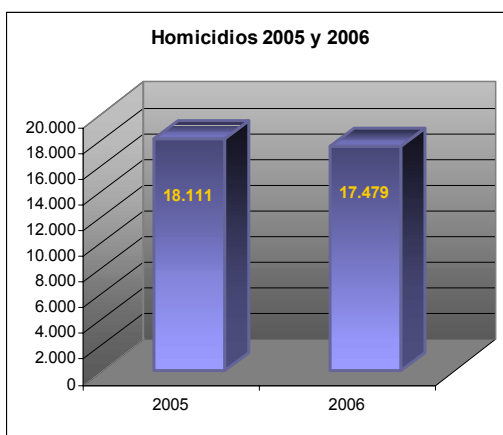




SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

HOMICIDIOS. Durante el año 2006, se registraron 17.479 homicidios, 3% menos que los registrados en 2005, año en el cual se presentaron 18.111, manteniéndose la tendencia a la baja de los últimos años, aunque se debe tener en cuenta que la disminución este año fue relativamente menor, puesto que entre 2002 y 2003 la reducción en el número de homicidios fue de 18%, entre 2003 y 2004 de 14% y entre 2004 y 2005 de 10%.



Fuente: CIC – Policía Nacional
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.

En 6 de los 33 departamentos del país (incluyendo el Distrito Capital), se concentró el 54% del total de homicidios registrados en 2006, siendo Valle del Cauca, al igual que en el año anterior, el departamento que registró el mayor número de homicidios para este periodo con 3.461 homicidios, concentrando el 20% del total a nivel nacional. Le sigue Antioquia con 2.174 homicidios (12%), el Distrito Capital con 1.372 (8%), Norte de Santander con 823, Risaralda con 798 y Nariño con 797, concentraron cada uno el 5% del total de homicidios del país. A pesar de que Valle ocupe el primer lugar, el número de homicidios disminuyó en un 2% con respecto a lo registrado en 2005. Antioquia, por su lado, continúa presentando una tendencia a la disminución, al registrar 9% menos que el año anterior, al igual que Bogotá que registró una merma del 18% y Risaralda con una disminución de 13%. Por el contrario, Nariño presentó un aumento de 8% y Norte de Santander del 5%, en cuanto al número de homicidios registrados en el año 2006.

En el departamento del Valle, el 75% de los homicidios se concentraron en cinco municipios, esencialmente en Cali con 44% (1.540), Buenaventura con el 12% (408), Palmira con 7% (226), Tulúa con 6% (214) y Cartago con 3% (1.073). Los municipios de Cali, Tulúa y Cartago registraron disminuciones de 3%, 9% y 32%, respectivamente, al comparar 2005 y 2006. Caso contrario ocurre en Palmira y Buenaventura, municipios que registraron un aumento del 20% y 39% con respecto al 2005.

El caso del municipio de Buenaventura es bastante crítico, puesto que gran parte de los homicidios están relacionados con el desarrollo de enfrentamientos entre las milicias de las Farc y grupos de desmovilizados de las autodefensas. Ambos grupos intentan retomar el poder y controlar las rutas para el tráfico de estupefacientes, lo cual elevó el número de homicidios durante el 2006, así como el número de actos de terrorismo, que ha producido varias muertes entre civiles y miembros de la Fuerza Pública. Ante esta situación, el Gobierno nacional decidió tomar medidas estructurales, tales como la asignación de un Cuerpo Elite Antiterrorista para la ciudad, la creación de un nuevo comando especial de Policía y el incremento del pie de fuerza.

En Antioquia, al igual que en el Valle del Cauca, la capital departamental concentró el mayor número de homicidios con 709, que representan un 33% del total departamental, seguido por Itagüi con 106 homicidios, Bello con 104 homicidios, cada uno equivale al 5% respectivamente y Turbo con 79, que representa el 4%. En Medellín, se registró una disminución de 6% con respecto al año anterior, al igual que en Bello, cuya disminución fue de 12%, sin embargo en Itagüi, se presentó un leve aumento del 3%, mientras que Turbo tuvo un significativo aumento de 39%, el cual puede estar relacionado por un lado por las *vendettas* entre grupos de narcotraficantes, acciones por parte de las Farc para copar los espacios dejados por las autodefensas y la lucha entre grupos delincuenciales y desmovilizados que se disputan el control territorial

del Golfo de Urabá. Evidencia de lo anterior, es la muerte de 12 ex-integrantes de las autodefensas, en este municipio, en los últimos seis meses de 2006, según información del Alto Comisionado para la Paz y Ministerio del Interior.

En Norte de Santander, el 53% de los homicidios del departamento se concentró en la capital Cúcuta con 410 homicidios, 6% menos que lo registrado en 2005. A Cúcuta le sigue Tibú con 64 homicidios, que equivale al 8%, Ocaña y Sardinata con 44 y 40 homicidios, que representan el 5% cada uno. Para los casos de Tibú y Sardinata, se registró un aumento en cuanto al número de homicidios, en el primer caso de 23% y en el segundo de 150%, estos aumentos estuvieron relacionados con enfrentamientos registrados en la zona entre miembros del Ejército y de las Farc, así como ataques perpetrados por parte de dicha organización contra miembros de la Fuerza Pública, los cuales causaron varias muertes en combate. En el caso de Risaralda, Pereira concentró el 48% de los homicidios del departamento (382), seguido por Dosquebradas con 21% (164) y Santa Rosa de Cabal con 10% (76). Con respecto a los dos primeros municipios, éstos registraron una disminución en el número de homicidios comparados con el año anterior, en 20% y 4% respectivamente; mientras que Santa Rosa de Cabal presentó un aumento de 23% con respecto a 2005.

NÚMERO DE HOMICIDIOS REGISTRADOS POR DEPARTAMENTO 2005 Y 2006

DEPARTAMENTO	2005	2006	Variación %	DEPARTAMENTO	2005	2006	Variación %
VALLE	3.533	3.461	-2%	TOLIMA	373	365	-2%
ANTIOQUIA	2.376	2.174	-9%	GUAJIRA	315	307	-3%
DISTRITO CAPITAL	1.669	1.372	-18%	QUINDIO	302	272	-10%
NORTE DE SANTANDER	786	823	5%	CORDOBA	173	258	49%
RISARALDA	915	798	-13%	CESAR	374	249	-33%
NARIÑO	738	797	8%	ARAUCA	277	185	-33%
META	535	730	36%	CASANARE	190	185	-3%
CALDAS	696	611	-12%	BOYACA	191	173	-9%
ATLANTICO	637	609	-4%	SUCRE	151	140	-7%
CAUCA	526	542	3%	CHOCO	151	120	-21%
SANTANDER	515	542	5%	GUAVIARE	129	117	-9%
BOLIVAR	444	502	13%	VICHADA	2	51	2450%
CAQUETA	405	465	15%	AMAZONAS	13	11	-15%
CUNDINAMARCA	424	426	0%	SAN ANDRES	7	8	14%
HUILA	404	398	-1%	GUAINIA	11	7	-36%
MAGDALENA	427	397	-7%	VAUPES	18	3	-83%
PUTUMAYO	404	381	-6%				

Fuente: CIC – Policía Nacional

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República

En Nariño, a diferencia de los demás departamentos considerados no fue la capital la que concentró el mayor número de homicidios, sino Tumaco con 219 homicidios, que representan el 27% del total de víctimas, seguido por Pasto con 134 víctimas (17%).

Por otra parte, de acuerdo con la tabla anterior, Vichada fue el departamento que registró el mayor aumento en el número de homicidios, lo cual está relacionado con varios factores: el primero, con el incremento en el número de combates en la zona, que arrojaron 16 muertos en el año, incluidos dentro de los datos de homicidios por la Policía Nacional. En segunda instancia, está relacionado con el territorio, puesto que este departamento es uno de los más extensos del país y la mayoría de su población vive dispersa en el área rural, lo que impide una presencia permanente por parte de la Fuerza Pública en todos los corregimientos e inspecciones.

Si se analizan las cifras por municipios, en 2006, se registraron homicidios en 878 municipios, es decir el 80% del total, 2% más municipios que el año anterior. De éstos, el 56% (489) registraron una tasa inferior al promedio nacional, la cual estuvo cercana a 37.37 hpch, el 25% (221) superaron la tasa de homicidios nacional y el 19% (168), superaron en más del doble la tasa de homicidios nacional.

Diez municipios con las tasas de homicidios más altas en 2006

MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	2005		2006	
		Homicidios	Tasa de homicidios	Homicidios	Tasa de homicidios
VISTAHERMOSA	META	94	464,060032	99	484,4629312
LA JAGUA DEL PILAR	GUAJIRA	0	0	6	354,6099291
PUERTO RICO	META	17	77,8887565	73	327,2075303
HACARI	NORTE DE SANTANDER	6	57,1319749	29	275,3251685
POLICARPA	NARINO	13	98,7766887	35	263,0985492
CUMBITARA	NARINO	14	197,266451	18	252,8800225
SAN LUIS DE CUBARRAL	META	7	134,693092	13	248,0442664
SOLITA	CAQUETA	3	28,8267512	25	235,7378595
LA URIBE	META	5	49,3973523	22	214,5085803
URUMITA	GUAJIRA	7	66,5146332	18	204,824761

Fuente: CIC – Policía Nacional

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República

Dentro de los municipios que registraron tasas de homicidio superiores en más del doble al promedio nacional, se encuentran en los departamentos de Meta (4 municipios), Nariño (2 municipios), Guajira (dos municipios), Norte de Santander (1 municipio) y Caquetá (1 municipio): Vistahermosa (Meta) con

una tasa de 484, La Jagua del Pilar (Guajira) con 354, Puerto Rico (Meta) con 327, Hacari (Norte de Santander) con 275, Policarpa (Nariño) con 263, Cumbitara (Nariño) con 252, San Luis de Cubarral (Meta) con 248, Solita (Caquetá) con 235, La Uribe (Meta) con 214 y Urumita (Guajira) con 204.

En los cuatro municipios del Meta, las elevadas tasas de homicidios se explican por ser centro de desarrollo de continuas operaciones de la Fuerza de Tarea *Omega*, quien tenía a su cargo el desarrollo del otrora *Plan Patriota*, ahora *Plan Consolidación*. En esta medida, la mayoría de las muertes allí registradas (52%) fueron fruto de enfrentamientos entre miembros de la Fuerza Pública y subversivos de las Farc.

En Policarpa y Cumbitara (Nariño), las elevadas tasas de homicidios también están relacionadas con la confrontación, pero en esta ocasión entre miembros de las Farc e integrantes de la Organización Nueva Generación (ONG), compuesta por desmovilizados del bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas, quienes se disputan el negocio de la droga en la zona.

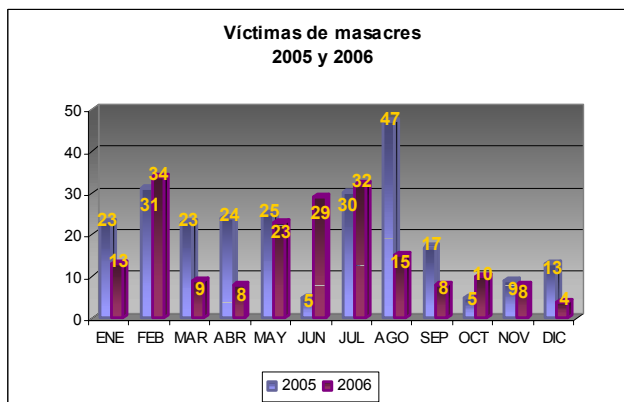
En Urumita (Guajira), 15 de los 18 homicidios registrados en 2006 tuvieron como víctimas a integrantes del bloque Norte de las Autodefensas, quienes murieron en combates con tropas del Batallón Rondón del Ejército, en desarrollo de la Operación "Firmeza", que buscaba combatir a integrantes de las autodefensas y de la guerrilla en la zona. Para el caso de La Jagua del Pilar, la mayoría de los homicidios fueron producto de choques armados entre miembros de la Fuerza Pública y subversivos.

En Hacarí (Norte de Santander), 21 de los 29 homicidios estuvieron relacionados con el desarrollo de la confrontación armada: una muerte fue producto de la activación de una mina antipersonal instalada por las Farc, otras dos fueron producto de combates entre miembros del Ejército y la subversión y las 18 restantes se debieron a una emboscada perpetrada por las Farc e integrantes del EPL en abril de 2006, en contra de unidades del Ejército y del DAS que realizaban una operación contra la columna Libardo Mora Toro del EPL. En Solita (Caquetá), de igual forma el 45% de las muertes fueron producto de los combates registrados en la zona, entre miembros del Ejército y guerrilleros de las Farc.

MASACRES. En el año 2006, se registraron 37 casos de masacres, que arrojaron 193 víctimas, es decir una disminución de 23% tanto en el número de casos, como en el número de víctimas, comparado con el mismo periodo de 2005, periodo en el que ocurrieron 48 casos y se registraron 252 víctimas.

Para 2006, se han registrado homicidios múltiples en 14 departamentos, siendo Nariño el más afectado con 32 víctimas, que presenta un aumento del 33% con respecto al año anterior, seguido por Antioquia con 29 víctimas,

departamento que presentó una disminución del 3% con respecto a 2005. De los 14 departamentos, 10 presentaron aumentos en cuanto al número de masacres registradas para el mismo periodo del año anterior, como es el caso de Meta, Santander, Risaralda, Magdalena, Guaviare, Córdoba, Chocó, Bolívar, Antioquia y Nariño.



Fuente: CIC – Policía Nacional
 Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.

En el caso de Nariño, se registraron masacres en cinco municipios, 2 en Barbacoas perpetradas por desconocidos, una de ellas en contra de cinco indígenas, una en Tumaco, Ancuya y Samaniego, respectivamente, también perpetradas por desconocidos y una en zona rural de Bocas de Satinga, donde fueron asesinados 10 hombres por miembros de las Farc, al parecer por estar dedicados al cultivo de hoja de coca.

En Antioquia, las masacres se presentaron en los municipios de Andes, Itagüi, Medellín, Sabanalarga, Salgar y Zaragoza. En Valle del Cauca, se registraron masacres en Buenaventura, Cartago, Guacarí, San Pedro y Palmira, en este último municipio fueron las Farc las responsables de la muerte de cuatro hombres, mientras que el resto de casos presentado en este departamento, no han sido adjudicado aún a ningún autor.

De acuerdo con los datos de la Policía Nacional, de las 37 masacres registradas en 2006, 6 fueron perpetradas por las Farc, 1 por el ELN, 1 por delincuentes comunes y sobre 29 casos no se ha podido establecer el autor. De estos casos, el 24% fueron bajo la modalidad de sicariato, los cuales en algunos casos han estado relacionados con venganzas y ajustes de cuentas entre grupos relacionados con el narcotráfico.

NÚMERO DE CASOS Y VÍCTIMAS DE MASACRES

DEPARTAMENTO	No. Casos		Variación % No. Casos	No. Víctimas		Variación % No. Víctimas
	2005	2006		2005	2006	
NARINO	5	6	20%	24	32	33%
ANTIOQUIA	4	6	50%	30	29	-3%
VALLE	16	6	-63%	91	27	-70%
META	1	4	300%	4	18	350%
CHOCO		2	100%		17	100%
SANTANDER	1	3	200%	4	16	300%
HUILA	3	2	-33%	13	13	0%
CAQUETA	2	1	-50%	12	9	-25%
CORDOBA		2	100%		9	100%
DISTRITO CAPITAL	3	1	-67%	13	6	-54%
BOLIVAR		1	100%		5	100%
GUAVIARE		1	100%		4	100%
MAGDALENA		1	100%		4	100%
RISARALDA		1	100%		4	100%
CALDAS	1		-100%	4		-100%
CASANARE	1		-100%	4		-100%
CAUCA	3		-100%	15		-100%
CESAR	1		-100%	4		-100%
CUNDINAMARCA	2		-100%	8		-100%
GUAJIRA	2		-100%	13		-100%
NORTE DE SANTANDER	2		-100%	9		-100%
PUTUMAYO	1		-100%	4		-100%
Total general	48	37	-23%	252	193	-23%

Fuente: CIC – Policía Nacional

Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.

Con respecto a las Farc, éstas asesinaron el 28 de enero de 2006 a cuatro campesinos en zona rural de San José de Guaviare (Guaviare), el 25 de febrero dieron muerte a nueve personas en Puerto Rico (Caquetá), entre ellas dos mujeres y un menor de edad; dos días después, ultimaron a 9 concejales en Rivera (Huila); el 12 de abril de 2006, cuatro hombres fueron asesinados por parte de este grupo armado ilegal en Palmira (Valle); el 1 de mayo, cuatro hombres de una misma familia murieron en Mesetas (Meta) y el 14 de junio, asesinaron a 10 personas más en Bocas de Satinga (Nariño). Finalmente, aunque la Policía Nacional le atribuye a desconocidos la masacre perpetrada el 12 de julio en Riosucio (Chocó), versiones de prensa responsabilizan a las Farc de este hecho, donde murieron 10 aserradores de madera. Estos homicidios múltiples atribuidos a las Farc coinciden con el aumento de víctimas de masacres registrado a nivel nacional para los meses de febrero, junio y julio, como se observa en la gráfica presentada anteriormente, evidenciando su peso preponderante en el incremento de las víctimas en estos meses.

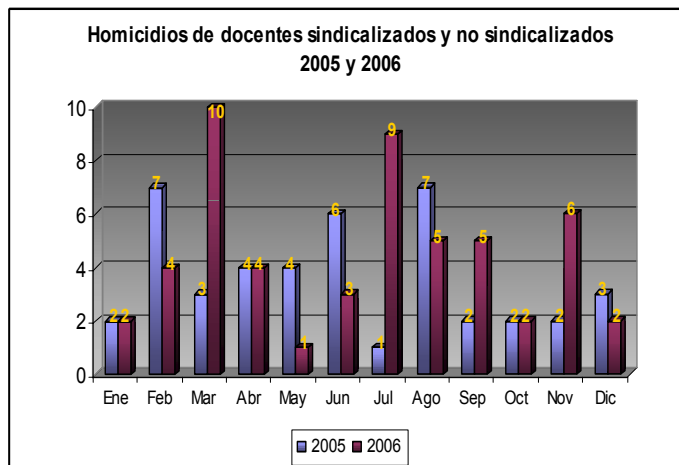
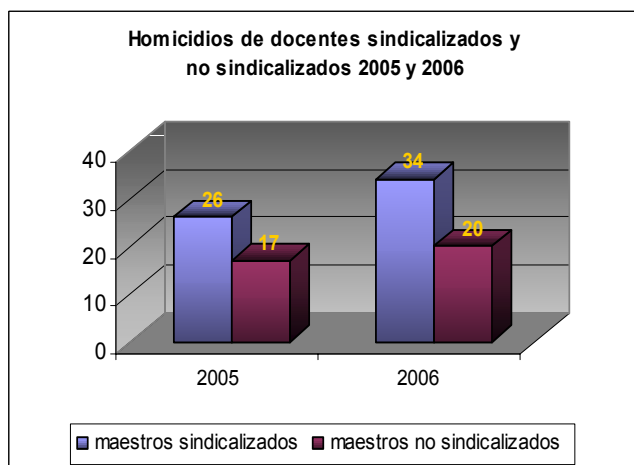
Así mismo, de acuerdo con dicha fuente, el 65% de las masacres que se registraron durante 2006, fueron en área rural y en especial, se vieron afectados los hombres, puesto que el 95% de las víctimas fueron de este género, de los cuales el 94% fueron mayores de edad.

SECTORES SOCIALES AFECTADOS

Maestros

De acuerdo con información de la Federación Colombiana de Educadores, (Fecode), del Ministerio de Protección Social y la Policía Nacional, en el año 2006 se registró el homicidio de 34 docentes sindicalizados y 20 docentes no sindicalizados. De los 32 sindicatos del magisterio, 17 resultaron afectados en el año 2006, es decir dos sindicatos más que el año anterior. Se destaca el hecho de que los homicidios de docentes sindicalizados persistan durante los años 2005 y 2006 en los departamentos del Valle, Antioquia, Cesar, Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Guajira, Arauca, Risaralda y Cauca.

En relación con los docentes sindicalizados, se observa un aumento de 31% en el número de homicidios, mientras que en el caso de los maestros no sindicalizados el número de homicidios aumentó en 18% con respecto al año 2005.



Fuente: Policía Nacional, Fecode, Ministerio de Protección Social

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.

En el año 2006, el sindicato del magisterio más afectado fue el Sindicato de Maestros de Nariño (Simana), al registrarse el homicidio de 6 de sus

miembros, en los municipios de Ricaurte, San Pablo, Barbacoas, El Charco, Samaniego y Sandoná. Esta situación concuerda con la intensificación de la actividad armada en los años 2005 y 2006 por parte de las Farc, el ELN y las nuevas bandas emergentes de autodefensa en el departamento de Nariño, lo cual ha afectado a diferentes sectores sociales de la región, resultando los docentes vulnerados por estas condiciones. Adicionalmente, se han registrado amenazas, que coincide con las regiones que presentan un alto nivel de intensidad de conflicto, principalmente en municipios de la Costa Pacífica nariñense.

La Asociación de Educadores del Magdalena (Edumag) y la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) también se vieron afectados al registrar, cada uno, 3 homicidios de docentes, en los municipios de Ariguani, Santa Marta, Cocorná, Nariño y Vigía del Fuerte. Así mismo, 16 maestros sindicalizados pertenecientes a la Asociación de Educadores del Atlántico (Adea), la Asociación de Educadores de Cundinamarca (Adec), Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), Asociación de Educadores del Cesar (Aducesar), la Asociación de Educadores de Arauca (Asedar), la Asociación de Educadores de Norte de Santander (Asinort), al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev) y al Sindicato Único de Maestros de Chocó (Umach) fueron víctimas de homicidio en los municipios de Barranquilla, Momil, Montería, Valledupar, Arauca, Tame, Cúcuta, Lourdes, Cali, Tulúa, Medio San Juan, Mosquera, Bogotá.

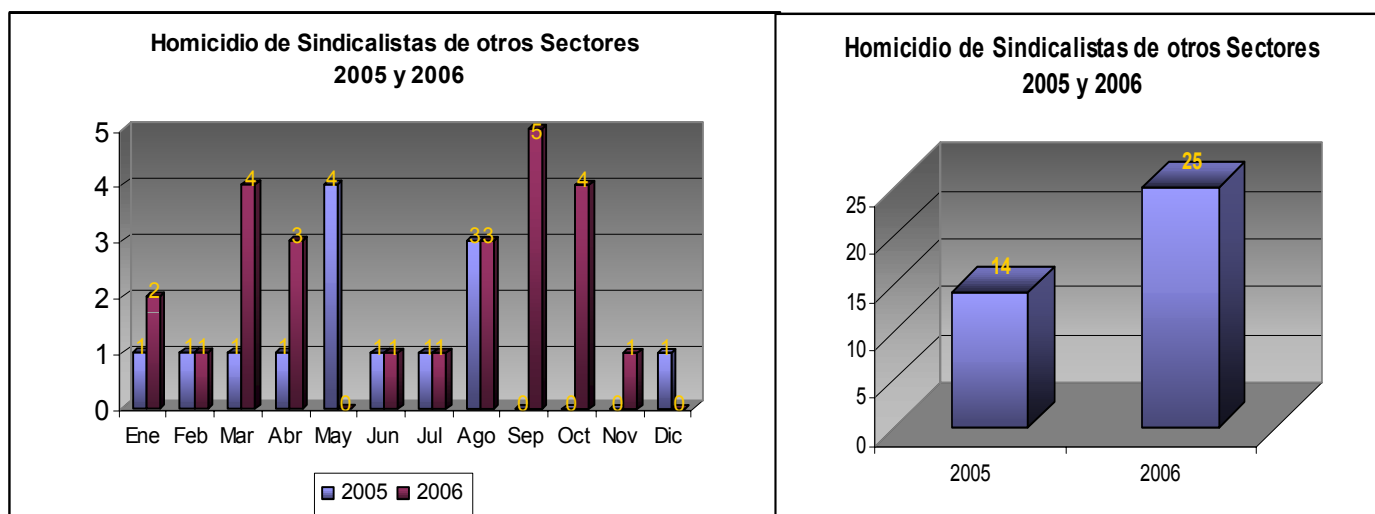
Otros sindicatos que registraron el homicidio de uno de sus afiliados fueron el Sindicato Único de Educadores de Bolívar (Sudeb), la Asociación de Educadores de Sucre (Ades), la Asociación de Educadores de la Guajira (Asodegua), el Sindicato de Educadores de Risaralda (Ser), la Asociación de Institutores del Cauca (Asoinca) y la Asociación de Educadores del Putumayo (Asep).

Entre los responsables, se encuentra la guerrilla de las Farc a la que se le atribuyen los homicidios de docentes sindicalizados ocurridos en Cartagena, Tame, Tulúa y Sandoná; el Eln, al que se le atribuye el homicidio de un docente afiliado a Asinort, a las autodefensas responsable del homicidio en Valledupar, en los casos restantes se desconoce el autor de los homicidios. Cabe destacar que el 73% de los docentes asesinados eran hombres, mientras que el 27% restante fueron casos de mujeres.

Por último, se observa que los homicidios de docentes no sindicalizados en 2006 ocurrieron en las ciudades de Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Sincelejo, Montería y en los municipios de Campamento, Chigorodó, Ituango, Purísima, Sahagún, Soledad, Cartago, Isnos y Santa Rosa de Cabal. 85% de estos casos correspondieron a homicidios de hombres y el 15% restantes a homicidios de mujeres.

Sindicalistas

En el año 2006, se registró el homicidio de 25 sindicalistas afiliados a 22 sindicatos de trabajadores, lo cual representa un aumento de 79% con respecto a los homicidios registrados en el mismo período de 2005. Sin embargo, cabe mencionar que si se compara la situación del año 2006 con la de 2004, se observa una disminución de 40%. Es importante destacar este hecho, puesto que el aumento registrado en el año 2006 podría estar relacionado con la intensificación de la violencia por parte de grupos armados ilegales en época de elecciones y por otro lado, como consecuencia del intento de consolidación de bandas delincuenciales que intentan amedrentar a la población civil a través de amenazas y la ejecución de homicidios de líderes. En este sentido, durante el año 2006 se presentaron amenazas contra sindicalistas en los departamentos de Atlántico y Norte de Santander y contra organizaciones indígenas y campesinas por parte de nuevas bandas delincuenciales emergentes en Antioquia y Córdoba.



Fuente: Ministerio de Protección Social, CIC de la Policía Nacional, ENS
 Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República

Como se observa en la gráfica, los meses de marzo, septiembre y octubre de 2006 fueron los más críticos del período, puesto que concentraron el 52% de las víctimas de homicidio. Los departamentos de Antioquia, Santander, Arauca y Bogotá fueron los lugares en los cuales se presentó con mayor frecuencia el homicidio de sindicalistas, al concentrar el 60% de éstos (5 víctimas en el primer caso, 4 en el segundo y 3 en el tercero y cuarto caso). En los departamentos de Caldas y Bolívar, se concentró el 16% de los homicidios, al registrar dos víctimas en cada caso y en Atlántico, la Guajira, Cauca,

Magdalena y Caquetá ocurrió el 20% de los homicidios, al registrarse un homicidio en cada departamento.

Los sindicatos más afectados por el homicidio de sus afiliados fueron el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (Sintrainagro), el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (Sintraelecol) y el Sindicato de Conductores de Taxi de Cartagena (Sintracontaxcar), puesto que además de haber registrado víctimas en el año 2005, en el año 2006 cada uno de estos sindicatos registró el homicidio de dos de sus miembros. Cabe destacar que en el caso de Sintrainagro, las dos víctimas eran miembros de la junta directiva del sindicato y en el caso de Sintraelecol una de las víctimas era directivo.

Homicidio de sindicalistas 2005 y 2006 por sindicato

SINDICATO	2005	2006
SINTRAELECOL	2	2
SINTRAINAGRO	1	2
SINTRACONTAXCAR	1	2
ASEINPEC	2	1
ANTHOC	2	1
ASCAPLAN	1	1
USO		1
SINTRAISS		1
SINALTRAINAL		1
ASONAL JUDICIAL		1
SINTRAOFAN		1
SINTRADEPARTAMENTO		1
SINTROEPAR		1
SINTRAIME		1
SINTRACARNE		1
SINTRAINQUIGAS		1
SINTRAPALESTINA		1
SINTRAEMSERVA		1
SINTRASANCARLOS		1
ACEB		1
SINTRAMINERGETICA		1
SINDIMANUELA		1
SINTRAGRITOL	1	
SINTRAGRICOLAS	1	
ASCONTROL	1	
SINPAVOL	1	
SINTRAUNICOL	1	
Total general	14	25

Fuente: Ministerio de Protección Social, CIC de la Policía Nacional, ENS

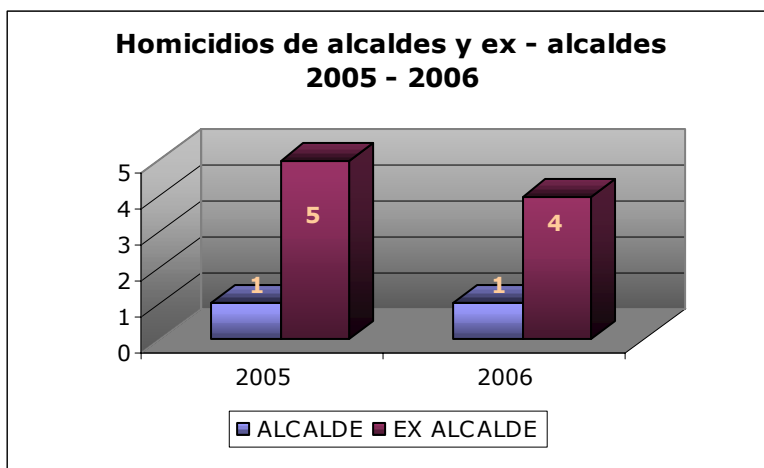
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República

En total 10 de las 19 víctimas de homicidio pertenecía a las juntas directivas de sus respectivos sindicatos, lo cual representa un aumento del 67% con respecto al año anterior, cuando se registró el homicidio de 6 dirigentes sindicales. Entre las 25 víctimas, una era mujer y en dos casos los responsables fueron las autodefensas, en otro la delincuencia común y en los restantes se desconocen los autores.

En busca del esclarecimiento de los hechos de violencia contra los sindicalistas, el Gobierno nacional viene adelantando desde el año 2006 una estrategia que busca prevenir los delitos que atentan contra los derechos humanos de los sindicalistas e identificar y sancionar a los responsables. Esta estrategia tripartita conformada por el Gobierno, los sindicatos y el sector empresarial desarrolla lo convenido en el Acuerdo Tripartito por el derecho de asociación y la democracia, suscrito por la delegación de Colombia que participó en la 95 Conferencia Internacional del Trabajo, y pretende contribuir a optimizar el respeto, la protección y la garantía de los derechos fundamentales de los trabajadores, y fortalecer el goce y el ejercicio pleno de las libertades sindicales.

AUTORIDADES LOCALES

Alcaldes y Ex-alcaldes



Fuente: Federación Colombiana de Municipios (FCM)
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.

Según información suministrada por la Federación Colombiana de Municipios (FCM), durante 2006 fueron víctimas de homicidio cuatro ex-alcaldes y un alcalde, registrándose una disminución del 17% en comparación con 2005, cuando fueron asesinados cinco ex-alcaldes y un alcalde. El Valle del Cauca fue

el único departamento que presentó homicidios de ex–alcaldes tanto en 2005 como en 2006, a diferencia de Nariño, Cesar, Córdoba y Caldas, donde las muertes de alcaldes y ex–alcaldes se dieron en 2006.

La primera víctima de 2006 fue Carlos Onofre Guevara Rodríguez, ex–alcalde del municipio de El Tambo (Nariño), en hechos ocurridos el 2 de febrero a manos de la delincuencia común. La segunda víctima fue Ramiro Devia Criollo, ex–alcalde del municipio de Tulúa (Valle del Cauca), asesinado el 15 de marzo por personas aún no identificadas. El tercer homicidio tuvo lugar el 28 de abril, cuando desconocidos le quitaron la vida al ex–alcalde de Aguachica (Cesar), David Alberto Simanca Camargo, quien entregó la alcaldía en marzo de 2006, luego de una demanda que anuló su elección. El cuarto asesinato fue perpetrado por delincuentes comunes el 6 de octubre contra el ex–alcalde de San Bernardo del Viento (Córdoba), Luis Alberto Castillo Oquendo. Por último, el 14 de octubre de 2006, presuntos integrantes del frente 47 de las Farc asesinaron al alcalde de Marulanda (Caldas) Rigoberto Castaño Tobar, mientras se movilizaba por el sector Las Peñas del municipio. Castaño Tobar fue único mandatario en ejercicio víctima de homicidio durante 2006.

Por otra parte, cabe resaltar que ningún alcalde fue secuestrado en 2006, a diferencia de 2005 cuando integrantes ELN secuestraron, y posteriormente liberaron, a Elicio de Jesús Caizama Isarama, alcalde encargado de municipio de Alto Baudó (Chocó), perteneciente a la Alianza Social Indígena.

Según la FCM, en el transcurso de 2006 se registraron 31 amenazas contra alcaldes y ex–alcaldes, lo que señala una disminución del 11% con respecto a 2005, cuando se registraron 35. Es importante señalar la crítica situación que afrontaron las autoridades locales del departamento de Norte de Santander, principalmente de los municipios de Convención, El Tarra, La Playa, San Calixto, Teorama, Hacarí y El Carmen, por las amenazas de muerte proferidas por las Farc durante los meses de octubre y noviembre. En este contexto, los alcaldes de los municipios señalados presentaron sus renuncias ante la Gobernación y detuvieron las gestiones municipales hasta recibir refuerzos en materia de seguridad por parte de la Fuerza Pública.

Por último, cabe señalar las permanentes amenazas efectuadas contra la Alcaldesa de Neiva (Huila), Cielo González Villa, por parte de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc, y las intimidaciones ejecutadas por esta misma estructura contra los alcaldes de los municipios de Puerto Rico, El Doncello y San Vicente del Caguán (Caquetá) a lo largo de 2006.¹

¹ Informe de Riesgo. No. 38 emitido por el Sat de la Defensoría del Pueblo, en septiembre de 2006.

CONCEJALES



Fuente: Fenacon

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.

De acuerdo con información suministrada por la Federación Nacional de Concejos de Colombia (Fenacon), durante 2006 fueron asesinados 23 concejales, lo que señala una disminución del 12% con respecto a 2005, cuando murieron 26.

El departamento del Huila concentró el 46% (11) de los homicidios cometidos en 2006, a diferencia de 2005 cuando el 39% de los asesinatos ocurrieron en los municipios de El Paujil, Puerto Rico y San Vicente del Caguán en Caquetá. El aumento en Huila responde, principalmente, a la masacre cometida el 27 de febrero por la columna móvil Teófilo Forero de las Farc en el municipio de Rivera, donde 9 de los 11 miembros del concejo municipal fueron asesinados mientras sesionaban en el centro recreacional "Los Gabrieles" en el área urbana del municipio. De los concejales asesinados, cuatro pertenecían al Partido Liberal Colombiano, tres al Movimiento Convergencia Popular Cívica y uno al Polo Democrático Independiente. De acuerdo con testimonios de organismos estatales, las víctimas habían sido declaradas objetivo militar por la misma organización a finales de 2005, razón por la cual contaban con medidas de protección dictadas por el Ministerio del Interior; sin embargo, este día, se avisó a las autoridades sobre la sesión con pocos minutos de anticipación.²

Dos concejales más pertenecientes al Partido Liberal Colombiano fueron víctimas de homicidio en el Huila; el primero de ellos, Herlides Avilés Salas, fue

² "Crimen de concejales desata debate nacional" En: Especial Rivera. Periódico La Nación. Tomado de: <http://www.lanacion.com.co/hoy/rivera.html>

asesinado en Baraya el 13 de abril por integrantes de las Farc; el segundo, Rafael Bustos, quien ejercía sus funciones en Campoalegre, murió el 25 de abril a manos de desconocidos.

Los homicidios perpetrados en este departamento, así como las amenazas pueden interpretarse como parte de los mecanismos adoptados por las Farc para mantener su dominio sobre los espacios de decisión política y la distribución del presupuesto local en los municipios aledaños a la antigua Zona de Distensión, ante el incremento en la presencia y accionar de la Fuerza Pública en la región en aplicación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

Norte de Santander y Tolima registraron dos homicidios de concejales cada uno, presentándose incrementos superiores al 100% con respecto a 2005 en Hacarí y Ocaña (Norte de Santander), y Chaparral y Suárez (Tolima). En el Valle del Cauca se registraron también dos homicidios, pero a diferencia de los departamentos mencionados, se observa una mejoría, pasando de cuatro concejales asesinados en 2005 a dos en 2006 en los municipios de Sevilla y Yumbo. Antioquia, Arauca, Caquetá, Córdoba, Guaviare y Santander registraron, cada uno, el homicidio de un concejal.

Por otro lado, cabe resaltar el incremento en el número de secuestros de concejales con respecto a 2005, pasando de dos a cuatro en el año que acaba de terminar. El 19 de febrero de 2006, en Puracé (Cauca), guerrilleros de las Farc secuestraron a la concejal Clara Inés Ortiz Murcia y a Manuel Felipe Barragán, quienes iban a reunirse con dicha guerrilla, con el fin de comprobar la supervivencia del diputado Carlos Alberto Barragán, padre de Manuel Felipe. La concejal murió en cautiverio el 30 de abril del presente año, mientras que el hijo del diputado fue liberado el 17 de octubre. El segundo plagio fue perpetrado el 21 de mayo también por las Farc en contra del concejal Elkin Alexander Villa Cruz en el municipio de Frontino (Antioquia), quien fue liberado al día siguiente. El tercer secuestro ocurrió el 8 de octubre contra la concejal Olga Lucía Rodríguez y su esposo, Edgar José Garnica, en el perímetro urbano de Suárez (Tolima) por parte de desconocidos. La concejal murió en cautiverio y su esposo fue gravemente herido. El último hecho tuvo lugar el 13 de noviembre cuando guerrilleros de las Farc secuestraron a Oscar de Jesús Chavarriaga Velásquez, concejal de Anzá (Antioquia), y lo liberaron el 20 del mismo mes.

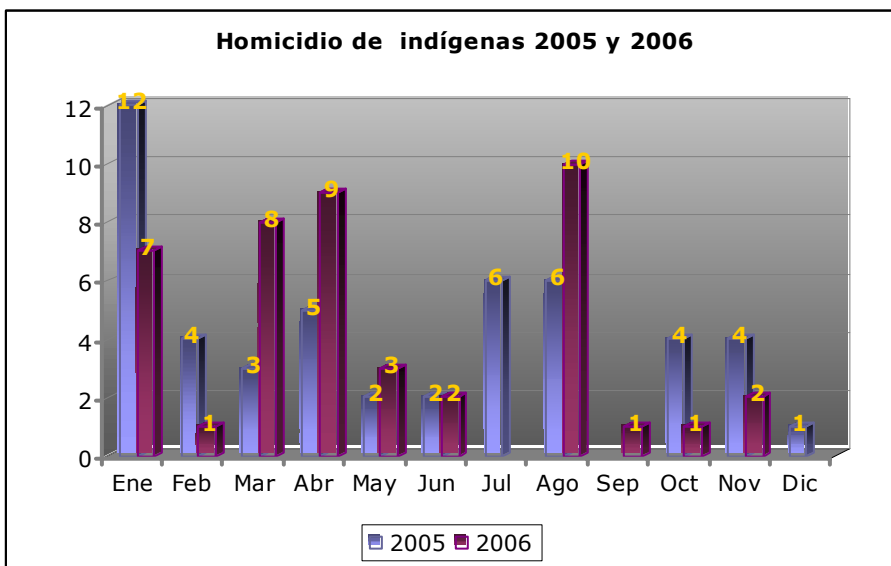
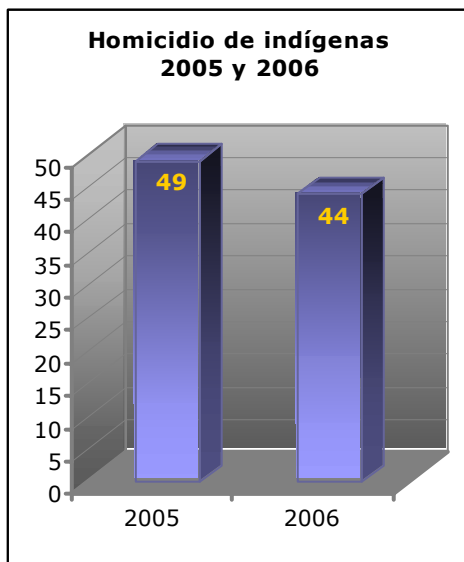
Así mismo, es importante mencionar la crítica situación que enfrentaron las autoridades locales de Norte de Santander y Caquetá por intimidaciones proferidas por grupos armados ilegales. En octubre y noviembre, los concejales de los municipios de Convención, El Tarra, La Playa, San Calixto, Teorama, Hacarí y El Carmen en Norte de Santander, recibieron amenazas de muerte por parte de miembros de las Farc. De otra parte, los concejales de los municipios

de San Vicente del Caguán, El Doncello y Puerto Rico en Caquetá fueron frecuentemente intimidados por miembros de la misma organización. Para contrarrestar tal escenario, miembros de la Fuerza Pública, representantes del Ministerio de Defensa y el presidente de Fenacon acordaron poner en práctica medidas de protección que implican comunicación constante entre concejales, Policía y Ejército y permanecer en lo posible en el casco urbano de los municipios.

Las amenazas a autoridades locales pueden interpretarse como una estrategia de este grupo armado ilegal para establecer su dominio sobre las estructuras del poder local en dos zonas de alto valor estratégico en el marco de la confrontación. En el caso de Norte de Santander, por las posibilidades de obtener recursos económicos de los cultivos ilícitos y encontrarse en la frontera colombo – venezolana; y en el caso de Caquetá, para deslegitimar las acciones de la Fuerza Pública en el marco del Plan *Consolidación*.

Indígenas

El homicidio de indígenas³ presentó una disminución de 10%, al pasar de 49 homicidios en 2005 a 44 en 2006. El mayor número de víctimas se registró en el mes de agosto, cuando fueron asesinados 10 indígenas. Esta cifra se explica por una masacre ocurrida en el corregimiento de Altaquer, municipio de Barbacoas (Nariño), en la que murieron cinco indígenas de la etnia Awá.



Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.
 Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.

³ Dentro de esta cifra se incluyen la totalidad de indígenas asesinados sin hacer distinción entre los homicidios selectivos y los múltiples (masacres).

Las etnias más afectadas durante el periodo estudiado fueron la Wayúu, con el 23% del total de las víctimas, seguida por la Awá y la Nasa Páez, que concentraron el 16% respectivamente; la Wiwa, que registró el 14% y la Embera Katío con 9%. Lo anterior ilustra una difícil situación para estas comunidades, debido a que todas aumentaron su porcentaje de participación con respecto a 2005, a excepción de la Nasa o Páez, que mantuvo su participación con 16%. En cuanto a los Wayúu y los Awá en 2005 concentraban el 8% respectivamente, los Wiwa el 6% y los Embera Katío el 2%. Sin embargo, se debe resaltar la mejoría en las condiciones de las etnias Embera y Embera Chamí, que disminuyeron el número de homicidios de 8 a 1 en el primer caso y de 5 a 1, para el segundo.

Por su parte, los Guahíbo, Guambiano, Kankuamo, Kiyasinga Pasto, Uitoto y Yanacona no registraron víctimas por homicidio durante 2006, mientras que los Embera Wannan, Hitnu (Makaguan), Pijao y Tukano, después de no haber registrado ningún homicidio en 2005, durante 2006 presentaron 2 homicidios respectivamente en el caso de las tres primeras etnias y una víctima en cuanto a la última.

Homicidio de indígenas por etnia 2005 y 2006

ETNIA	2005	2006
WAYUU	4	10
AWA	4	7
NASA O PAEZ	8	7
WIWA	3	6
EMBERA KATIO	1	4
EMBERA WANAAN		2
HITNU (MAKAGUAN)		2
PIJAO		2
EMBERA	8	1
EMBERA CHAMI	5	1
SENU	1	1
TUKANO		1
GUAHIBO	3	
GUAMBIANO	1	
KANKUAMO	1	
KIYASINGA PASTOS	1	
NO PRECISA	4	
UITOTO	1	
YANACONA	4	
TOTAL GENERAL	49	44

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.
 Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República

En el caso de los Awá, la masacre ocurrida en agosto demuestra el asedio que los grupos al margen de la ley ejercen sobre la población ubicada en el municipio de Barbacoas y demás territorios objeto de disputa por el dominio sobre el acceso al Pacífico, los cultivos ilícitos y el tráfico de combustible. Las víctimas de la masacre hacían parte de un grupo de 1.700 indígenas que se vieron obligados a desplazarse de sus territorios, después de que aumentaran los combates entre el Ejército y la guerrilla en el departamento de Nariño, que en 2006 alcanzaron los 78 contactos armados.

Cabe resaltar que las acciones de los grupos armados irregulares en el municipio de Barbacoas aumentaron de 6 en 2005 a 17 en 2006, por lo que la Brigada 29 del Ejército atribuyó la masacre a miembros de las Farc, en presunta represalia por la falta de colaboración de los indígenas y su actitud neutral frente a las acciones armadas de este y otros grupos. En efecto, 13 de las 17 acciones ocurridas durante 2006 en el municipio de Barbacoas, fueron cometidas por las Farc, lo que equivale a un aumento de 333% después que en 2005 se habían registrado 3 acciones. Este aumento significativo en las acciones denota el interés estratégico que las Farc tienen sobre Barbacoas y los territorios indígenas, por su proximidad con Tumaco y por encontrarse en la frontera con Ecuador.

Con relación a los Wayúu, el homicidio se incrementó en 150% durante el período considerado, al pasar de 4 en 2005 a 10 en 2006. Este incremento se debe principalmente a los enfrentamientos que se han presentado entre familias de la etnia Wayúu y reductos de las autodefensas del bloque Norte desmovilizadas en marzo del último año. Los integrantes de esta etnia han protagonizado un movimiento que busca no sólo resistir el accionar de estos grupos, sino también cortar su influencia en los principales puertos naturales de la región.

En este sentido, la confrontación entre algunos integrantes de la etnia Wayúu y los autodefensas se inicia con la masacre de Bahía Portete ocurrida en abril de 2004. Este puerto es uno de los más importantes para la entrada de mercancía de contrabando al país y la salida de estupefacientes al exterior, por lo que las autodefensas han buscado someter a la población indígena, con el fin de controlar y proteger los puertos. Según versiones de pobladores de la zona, reductos de las autodefensas continuarían con la labor que venía haciendo el bloque Norte de las AUC.

Con respecto a los Wiwa, los homicidios se incrementaron en 100%, al pasar de 3 en 2005 a 6 en 2006. Varias de las víctimas de estos homicidios han sido *gunamas* e importantes líderes de la comunidad que, según versiones locales, fueron asesinados por una banda delincuencia emergente integrada por miembros de las autodefensas que no participaron en el proceso de desmovilización del bloque Norte y que estarían operando en la región del Alto San Jorge en la Sierra Nevada de Santa Marta.

El aumento del homicidio en las comunidades Wayúu y Wiwa demuestra la grave situación que afecta al departamento de la Guajira en las partes alta y baja respectivamente, por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales interesados en mantener el control sobre estos territorios que sirven para el tráfico de estupefacientes como es el caso de la Alta Guajira y para acceder a la Sierra Nevada de Santa Marta, como ocurre en la Baja Guajira.

Un aspecto que indica la delicada situación en el departamento es la intensidad de la confrontación, la cual aumentó significativamente durante 2006. Las acciones de los grupos armados al margen de la ley, especialmente de grupos armados sin identificar, se incrementaron en 150%, al pasar de 10 en 2005 a 25 en 2006 y los contactos armados registraron un aumento de 132%, al pasar de 38 a 88. Este aumento en la intensidad de la confrontación demuestra la importancia estratégica que ha cobrado el departamento de la Guajira y la disputa que los grupos armados al margen de la ley mantienen sobre la región, afectando las comunidades indígenas presentes en los territorios en disputa. Así mismo, las agrupaciones armadas están interesadas en mantener el dominio sobre la Sierra Nevada de Santa Marta por las ventajas estratégicas que representa, al comunicar los departamentos Cesar, Guajira y Magdalena. De igual manera, porque los ríos de la Sierra la salida de la droga hacía el mar; además, su tierra es apta para la siembra de cultivos ilícitos y se ha convertido en una zona de retaguardia de gran importancia por su territorio agreste.

Por otra parte, al revisar la participación por departamentos, se confirma la grave situación en la Guajira puesto que la mayoría de las víctimas se presentaron en este departamento con 16, específicamente en los municipios de Riohacha (5), San Juan de Cesar (4), Uribía y Albania (3 respectivamente) y Dibulla (1); seguido por Nariño con 7, en los municipios de Barbacoas (5); Tumaco y Ricaurte (1 respectivamente); y Chocó con 6, en los municipios de Quibdó (3), Medio San Juan (2) y Bagadó (1). Las situaciones más preocupantes se encuentran en los dos primeros departamentos, donde los homicidios aumentaron en un 129%, al pasar de 7 en 2005 a 16 en 2006 y de 5 a 7 en 2006, respectivamente.

A pesar de que los principales responsables de los homicidios en la Guajira desde 2000 han sido los desconocidos y las autodefensas, en 2006, las Farc asesinaron a un líder Wayúu después de que desde 2003 no había ninguna víctima por parte de este grupo armado irregular. No sólo este asesinato habla del asedio que también ejercen las Farc sobre la población indígena, sino también otras acciones como el ataque a las instalaciones de Ayatawacoop, el 15 de agosto de 2006, cuando guerrilleros del frente 59 de las Farc atentaron con cinco cilindros de gas contra el centro de almacenamiento creado por los indígenas Wayúu para comercializar en territorio guajiro la gasolina que les vende Venezuela. El ataque provocó un incendio que dejó 88 camiones de transporte de combustible quemados y afectó algunas rancherías cercanas a las instalaciones del centro.

En lo que respecta a Chocó el aspecto que más incide en el asedio de los grupos armados al margen de la ley sobre la población es la estigmatización a la que se le ha sometido. Según las organizaciones indígenas de la zona, los homicidios no son la única forma de mantener el control social sobre los

pobladores sino también las restricciones a la libre movilidad y los bloqueos económicos, puesto que se asume que el excedente de alimentos se destina al adversario. Un ejemplo de estas medidas fue el paro armado decretado desde el 6 de febrero de 2006 por el bloque José María Córdoba de las Farc, que provocó escasez en los productos de primera necesidad y un aumento en el precio de los mismos.

Vale la pena mencionar que en el mes de marzo de 2006, se produjo un desplazamiento masivo de indígenas de la etnia Wounnan (alrededor de 1.700), después de que las Farc asesinaran a dos profesores de la comunidad, a quienes acusaron de ser colaboradores del Ejército. Ambos asesinatos son una clara violación al DIH, no sólo por el homicidio de civiles sino por las características en los que fueron asesinados, intimidando y atemorizando al resto de la comunidad, puesto que la primera víctima ya había sido secuestrada el 30 de marzo en el centro educativo Genaro Opuá Quiro, de la comunidad de Unión Wounaan y su cuerpo fue encontrado con señales de tortura; mientras que el segundo indígena fue asesinado un día después, cuando se dirigía al sepelio de su compañero.

Otro hecho que ilustra el irrespeto por parte de las Farc a los principios del DIH, fue el homicidio de la pareja de indígenas Hitnu (Makaguan) en Arauca. El doble homicidio tuvo gran impacto sobre la comunidad, no sólo por el rol que desempeñaban las víctimas al interior de la misma (gobernador y profesora) sino por la forma como se desarrollaron los hechos. Las Farc asesinaron al gobernador por no cumplir la orden de paro armado impartida por la guerrilla en el departamento y posteriormente, su esposa fue asesinada por miembros del mismo grupo armado irregular en un retén ilegal, cuando regresaba con el cuerpo de su esposo.

Por otra parte, los departamentos de Tolima y Vaupés fueron los únicos que después de no haber registrado homicidios de indígenas en 2005, durante 2006 presentaron 2 y 1 homicidio respectivamente. Las dos víctimas en Tolima fueron dos indígenas de la etnia Pijao, asesinados por el frente 21 de las Farc que actúa en la región, después que éstos se negaran a pagar la vacuna que el grupo armado al margen de la ley exige en las zonas donde tienen influencia.

Cabe resaltar, que con excepción de los aumentos en Guajira, Nariño y Valle⁴, los departamentos restantes disminuyeron el número de homicidios tales como Cauca, que redujo los homicidios en 67%, al pasar de 12 en 2005 a 4 en 2006; Caldas disminuyó en 75%, al registrar 1 homicidio en 2006, cuando en 2005 presentó 4; y finalmente, Arauca registró 2 homicidios en 2005, después de que en 2006 presentó 4, lo que equivale a una reducción de 50%. Por su

⁴ Donde los homicidios aumentaron en 100%, al pasar de 1 en 2005 a 2 en 2006.

parte, Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cesar, Quindío y Sucre que en 2005 presentaron homicidios, este año no registraron ninguno.

Con respecto a la autoría, la participación de los presuntos responsables no ha cambiado significativamente. Durante 2006, los desconocidos fueron responsables de 20 homicidios (45%), seguido por las Farc con 10 (23%), otros autores con 9 (20%) y las autodefensas con 5 (11%). De esta manera, al comparar con 2005, el orden de participación se mantuvo puesto que en 2005, los autores desconocidos fueron responsables de 25 homicidios (51%), seguido por las Farc con 13 (27%), otros autores con 8 (14%) y las autodefensas con 3 (6%).

En lo relacionado con secuestros, el número de indígenas plagiados disminuyó en un 83%, al pasar de 23 en 2005 a 4 durante 2006. En el mes de enero, un indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta fue secuestrado por desconocidos. En el mes de abril, fueron plagiados un indígena de la etnia Coconuco por desconocidos en Puracé (Cauca) y un indígena Awá en Barbacoas (Nariño) por miembros de las Farc. Así mismo, en el mes de junio fue secuestrado otro indígena Coconuco nuevamente en el municipio de Puracé (Cauca). Cabe resaltar que la Organización Indígena de Antioquia reportó la desaparición de dos indígenas Embera del resguardo Andabu del municipio de Urrao, de la cual hasta el momento no se tiene mayor información.

Además, es importante mencionar la delicada situación de la etnia Nukak Makú, quienes tuvieron que desplazarse debido a la presencia de las Farc quienes pretendían que las comunidades sembraran coca en sus territorios. A pesar de los esfuerzos hechos por el Gobierno nacional en 2006, los indígenas no han podido retornar a los mismos, donde han estado por décadas, poniendo en grave peligro la supervivencia de esta etnia.

Finalmente, en 2006 se evidenció una problemática en cuanto a la siembra de minas antipersonal en sus territorios, que amerita mayores acciones por parte del Gobierno nacional y local por afectar a los pueblos indígenas colombianos. La siembra de estos artefactos implica además restringir el derecho a la libre locomoción y provocar inseguridad alimentaria, amenaza a las tradiciones religiosas y el patrimonio cultural de estos pueblos, puesto que las minas están siendo sembradas en los sitios sagrados, donde éstas llevan a cabo los cultos y en zonas de importancia como valles y lagunas.

Periodistas



Fuente: Flip

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República

De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en 2006 se registró un aumento del 50% en el número de periodistas asesinados, pasando de dos en 2005 a tres en el último año. Los periodistas asesinados fueron Gustavo Rojas Gabalo, Milton Fabián Sánchez y Atilano Segundo Pérez.

Gustavo Rojas Gabalo fue víctima de un atentado ejecutado el 4 de febrero en Montería (Córdoba) por presuntos ex-integrantes de las autodefensas. Rojas Gabalo emitía un programa radial llamado "El show de Gaba" en la emisora Radio Panzenú, donde denunciaba casos de irregularidades en la gestión de servidores públicos de Montería.

Milton Fabián Sánchez, periodista de la emisora Yumbo Estéreo, fue muerto el 9 de agosto en Yumbo por sicarios que se movilizaban en motocicleta. Sánchez conducía dos programas institucionales llamados "Notas de gestión" y "La Personería", y tenía un espacio comunitario denominado "Mesa Redonda", donde abordaba temas políticos. De acuerdo con información suministrada por la Flip, el periodista había denunciado de manera pública la existencia de ollas de distribución de drogas en diferentes sectores de Yumbo.⁵

Atilano Segundo Pérez Barrios, ex-diputado del departamento de Bolívar, fue asesinado en frente de su lugar de residencia en Cartagena el 22 de agosto de 2006 por personas que se movilizaban en motocicleta. Pérez Barrios se desempeñaba como director del programa dominical de radio "El Diario de Maria La Baja" transmitido por Radio Vigía de Todelar, donde se informaba

⁵ Fundación para la Libertad de Prensa. *Informe sobre Libertad de prensa en Colombia entre julio y septiembre de 2006*. En: www.flip.org.co.

sobre diversos temas políticos y sociales del municipio de Maria La Baja (Bolívar).⁶

Además, de acuerdo con información suministrada por Fondelibertad, en 2006 se produjo el secuestro de un periodista, registrándose una disminución del 50% con respecto a 2005. El afectado fue Germán Alonso Guzmán Nogales, retenido el 18 de marzo en Bogotá D.C por delincuentes comunes, y liberado el 20 del mismo mes en Cali. Adicionalmente, según la Flip, el 16 de agosto, el periodista Jorge Enrique Rojas y el fotógrafo Mauricio Pinzón, del diario "El País" de Cali, fueron retenidos durante 46 horas por integrantes de las Farc en el municipio de La Uribe (Meta).

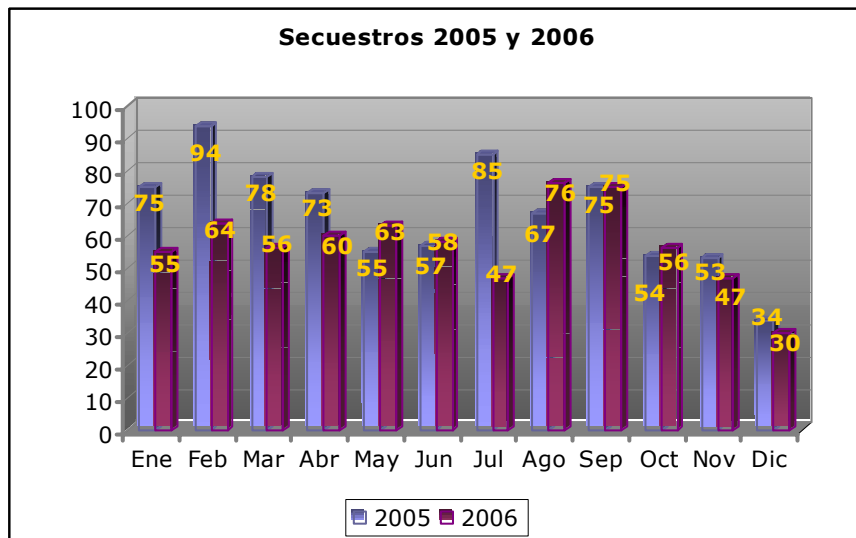
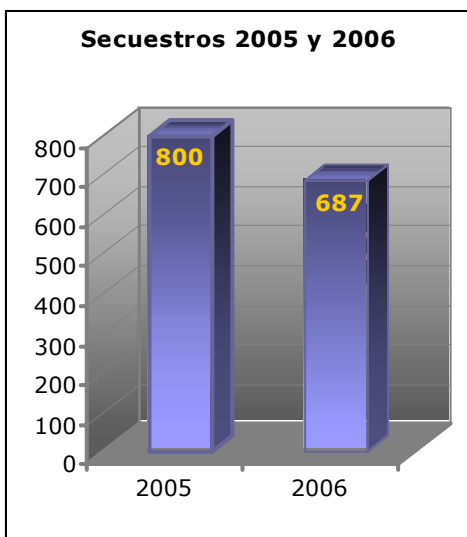
Por último, cabe señalar las constantes amenazas contra la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) por parte de grupos de autodefensas y las intimidaciones contra seis comunicadores de los departamentos de Atlántico, Magdalena y Sucre, lo que convierte a los periodistas de radio y prensa de la Costa atlántica en las mayores víctimas de homicidios y amenazas en el país.

Es así como se registraron intimidaciones en el mes de junio contra el director del periódico El Herald de Barranquilla, Gustavo Bell Lemus y los columnistas de dicho medio, Ernesto McCausland Sojo y Armando Benedetti Jimeno. Al parecer, relacionadas con artículos críticos sobre la situación de criminalidad en Barranquilla. De igual manera, en el mes de julio, el periodista José Herbin Hoyos Medina recibió amenazas a través de la página de Internet de la organización "Voces del Secuestro", horas después de emitir un programa radial sobre posibles irregularidades en los procesos de extradición a Estados Unidos.⁷ Otro hecho tuvo lugar el 14 de noviembre contra José Ponce Obispo, director del programa radial "Mi Radioperiódico" de la emisora Radio Galeón de Santa Marta, quien recibió amenazas de muerte por vía telefónica y visitas a su residencia, después de anunciar una marcha convocada por líderes sociales de la Sierra Nevada de Santa Marta. La periodista Olga Brú Polo, del diario "El Meridiano de Sucre" de Sincelejo, también fue víctima de intimidaciones, después de publicar varios informes que denunciaban anomalías en la administración pública de Sincelejo.

⁶ Op. Cit.

⁷ Tomado de: <http://www.flip.org.co/listado.php> . Capturado: 18/10/2006

SECUESTROS. En el año 2006, el número de secuestros descendió a 687, manteniéndose, de esta manera, la tendencia a la baja que se viene registrando desde 2001. Esta disminución equivale a una reducción de 14% al comparar con 2005, cuando se presentaron 800 secuestros. Vale la pena resaltar que, no obstante la importante disminución en 2006 (113 casos menos que en 2005), la reducción del número de plagios es cada vez menor con relación a los porcentajes de descenso presentados en años anteriores.



Fuente: Fondelibertad

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.

La reducción presentada en 2006 obedece, en mayor proporción, a una disminución del 25% en el número de secuestros extorsivos, que pasó de 377 en 2005 a 282 durante 2006, y, en menor medida, a la disminución del secuestro de carácter simple, que se redujo en 3%, puesto que en 2006 se presentaron 377 casos mientras que en 2005 se habían registrado 387.

Con respecto a los secuestros de carácter extorsivo, la mayoría de éstos se concentraron en Antioquia con 15%, seguido por Valle con 11%, Bogotá con 10%, Cauca y Tolima con 6% cada uno y Bolívar y Nariño con 5% respectivamente. Estos departamentos concentraron el 58% del total de secuestros extorsivos registrados en el país.

Es importante aclarar que a pesar de presentar los mayores porcentajes de participación, la mayoría de los departamentos mencionados anteriormente registraron una disminución en términos absolutos; tal es el caso de Antioquia, Valle, Cauca, Bolívar y Nariño, mientras Bogotá y Tolima vieron aumentar el número de plagios.

El aumento de los secuestros en Bogotá está determinado por la comisión, la mayoría de las veces por la delincuencia común⁸, del “secuestro express”, que consiste en plagiar a la víctima para hurtarle el dinero y sus pertenencias. Con respecto a este punto, uno de los sectores más afectado por este tipo de secuestro son los taxistas. Durante 2006, se presentaron varios casos de robo de taxis en Bogotá, donde se ha conformado un mercado negro alrededor de ciertas marcas de carros y sus repuestos. Así mismo, se produjeron un importante número de secuestros relacionados con ajustes de cuentas. En estos casos, los secuestradores buscan saldar una deuda a través del secuestro de algún familiar cercano al deudor para presionar el pago.

En cuanto a Tolima, el secuestro extorsivo tiene fines claramente económicos, puesto que la mayoría de las víctimas fueron comerciantes, ganaderos y agricultores a quienes se les exigió importantes sumas de dinero. Más del 50% de las víctimas cancelaron alguna suma para ser liberadas⁹.

La mayoría de los secuestros extorsivos fue cometido por la delincuencia común con 39%, seguido por las Farc con 27%, el ELN con 16%, el EPL y ERG con 2% cada uno y las autodefensas y el ERP con 1% respectivamente; sin embargo, sobre el 12% de los secuestros extorsivos no se tiene un autor establecido. Hay que mencionar que la delincuencia común y las guerrillas más pequeñas como el EPL y el ERG aumentaron -en términos absolutos- el número de secuestros cometidos, mientras que las guerrillas más grandes como Farc y el ELN, lo disminuyeron, al igual que las autodefensas y el ERP.

Esta diferencia entre guerrillas puede explicarse por la mayor relación entre las grandes guerrillas con la coca y los recursos derivados de este negocio ilícito, mientras que dicha relación es más difícil de establecer con las guerrillas pequeñas. Así mismo, los esfuerzos militares se han enfocado en combatir a las primeras, especialmente a las Farc, mientras que las segundas no han sido prioridad para la Fuerza Pública, precisamente por su bajo accionar armado.

En cuanto a los secuestros simples, 16% de éstos se presentaron en Meta, donde la Fiscalía ha relacionado la mayoría de los casos con el delito de hurto. Le sigue Tolima con 12%, Bogotá con 11%, Cundinamarca con 9%, Cauca con 7% y Antioquia, Nariño y Magdalena con 5% respectivamente. Estos departamentos concentraron el 69% de los secuestros simples. No obstante encontrarse entre los departamentos con mayor porcentaje de afectación, los

⁸ Con relación a los secuestros perpetrados por la delincuencia común en la capital del país, éstos aumentaron en 150%, al pasar de 24 en 2005 a 60 en 2006. La mayoría de los casos está relacionado con secuestros “express” y hurto a las víctimas.

⁹ Con relación al tema de las liberaciones por pago, la Fundación Nueva Esperanza de Secuestrados, informó que las Farc asesinaron a 45 secuestrados por no cancelar su liberación. Según Mauricio Muñoz, director de la Fundación “Les están dando ocho meses y si no pagan los matan. Además, les cobran 20 millones de pesos para devolverles el cadáver”. Para mayor información ver: http://www.eluniversal.com.co/noticias/20070124/ctq_nal_asesinaron_a_45_secuestrados_en_cautiver.html

departamentos de Tolima, Cundinamarca, Cauca y Nariño han disminuido, en términos absolutos, el número de secuestros de carácter simple, mientras que Meta, Bogotá, Antioquia y Magdalena incrementaron el número de secuestros de este tipo.

Un caso preocupante vuelve a ser el de la capital del país donde los secuestros simples en 2006 aumentaron en 133% con respecto a 2005, al pasar de 18 a 42. Al analizar las denuncias de las víctimas o sus familiares, vuelve a aparecer el hurto como la principal razón del plagio. Sin embargo, el secuestro de menores para ser posteriormente “vendidos” a estructurales criminales dedicadas a la trata de personas, también ha contribuido al ascenso del número de secuestros en Bogotá¹⁰.

Así mismo, en Antioquia y Magdalena, algunos de los secuestros estuvieron relacionados con robo y hurto de mercancía. En este sentido, la disminución del secuestro simple requerirá de medidas de seguridad ciudadana y convivencia efectivas por parte de las administraciones municipales, puesto que la mayoría de los casos en todos los departamentos, en los cuales se presentó un incremento durante 2006, están relacionados con el accionar de bandas delincuenciales dedicadas al hurto de mercancía y bienes.

Por otra parte, el 40% de este tipo de secuestro fue ejecutado por la delincuencia común, seguida por las Farc con 11%, el ELN con 5% y las autodefensas, los familiares y el ERG con 1% respectivamente; sin embargo, hay que aclarar que sobre el 41% de los secuestros simples, no se ha podido establecer el autor. En términos absolutos, las Farc, las autodefensas y los familiares disminuyeron el número de secuestros simples, mientras que la delincuencia común, el ELN, el ERG y el ERP lo aumentaron.

Durante 2006, se presentaron secuestros en 28 de los 32 departamentos, siendo el más afectado Meta y Bogotá con 75, seguido por Antioquia con 68, Tolima con 61, Valle con 48 y Cundinamarca y Cauca con 42. La mayoría de los departamentos disminuyeron el número de secuestros; al respecto se deben destacar los casos de Caldas, donde los plagios se redujeron en 79%, al pasar de 24 en 2005 a 5 durante 2006. Así mismo, La Guajira registró una disminución de 69%, al pasar de 16 a 5; en Santander, los secuestros cayeron en 68%, puesto que en 2006 se presentaron 10 víctimas cuando en 2005 se habían registrado 31 y Guaviare alcanzó una reducción del 64%, al pasar de 11 a 4. También se registraron disminuciones importantes en Vichada, Nariño, Bolívar y Risaralda.

Por el contrario, la situación en Bogotá se deterioró durante 2006, puesto que los casos aumentaron de 36 a 75, lo que significa un aumento de 108%. Este

¹⁰ Con respecto a este punto, el número de menores secuestrados en Bogotá pasó de 3 a 17.

aumento obedece al elevado número de secuestros simples relacionados con hurtos y secuestros simples, como se mencionó anteriormente. También se registraron incrementos en Putumayo, Magdalena, Norte de Santander, Antioquia, Cesar y Valle. Por su parte, Vaupés no registró secuestros en 2006.

Secuestros por departamento 2005 y 2006

Departamento	2005	2006	Variación %	Departamento	2005	2006	Variación %
META	86	75	-13%	CESAR	13	14	8%
BOGOTA D.C.	36	75	108%	CHOCHO	16	13	-19%
ANTIOQUIA	62	68	10%	BOYACA	10	10	0%
TOLIMA	64	61	-5%	SANTANDER	31	10	-68%
VALLE	47	48	2%	SUCRE	13	10	-23%
CUNDINAMARCA	57	42	-26%	ARAUCA	12	9	-25%
CAUCA	60	42	-30%	PUTUMAYO	4	8	100%
NARIÑO	61	33	-46%	ATLANTICO	9	6	-33%
NORTE SANTANDER	22	28	27%	CALDAS	24	5	-79%
MAGDALENA	14	26	86%	LA GUAJIRA	16	5	-69%
CAQUETA	27	23	-15%	GUAVIARE	11	4	-64%
BOLIVAR	31	19	-39%	CORDOBA	2	2	0%
CASANARE	23	18	-22%	VICHADA	2	1	-50%
HUILA	23	17	-26%	VAUPES	1		-100%
RISARALDA	23	15	-35%				

Fuente: Fondelibertad

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.

Con relación a la autoría de los secuestros, no se aprecia un cambio significativo en la participación de los presuntos responsables, al comparar el total de los casos registrados en 2005 con 2006. Para 2005, el 27% de los secuestros fueron perpetrados por la delincuencia común, seguido por las Farc con 24%, el ELN con 12%, las autodefensas con 7% y el ERP, EPL y familiares con 1% respectivamente; cabe resaltar sobre el 28% de los casos no se pudo establecer el autor.

De igual manera, para 2006 la mayoría de los secuestros fueron perpetrados por la delincuencia común con 39%, quienes aumentaron en 12 puntos su participación con respecto al año anterior, seguido por las Farc con 17%, que registra una leve reducción, al igual que el ELN que concentró el 9%. Las autodefensas disminuyeron su participación en 6 puntos, al concentrar el 1% del total de secuestros en el país. Otras guerrillas como el EPL, ERG y ERP y familiares participaron con 1% respectivamente. No obstante, sobre el 30% de los secuestros no se tiene conocimiento del autor.

Secuestros por autor 2005 y 2006

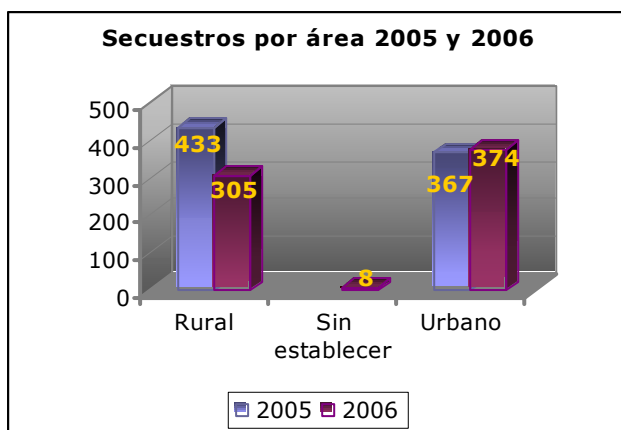
AUTOR	2005	2006
DELCO	219	269
SIN ESTABLECER	222	200
FARC	192	123
ELN	92	63
AUTODEFENSAS	52	10
ERG	3	7
EPL	4	6
FAMILIARES	9	6
ERP	7	3
TOTAL GENERAL	800	687

Fuente: Fondelibertad

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.

Por otro lado, 523 de las víctimas registradas este año fueron de sexo masculino, es decir el 76% y el 24% restante, es decir 164, fueron mujeres. De los 687 secuestrados, 111 fueron menores de edad, es decir un 16% del total, siendo la capital del país la más afectada con 15%, seguido por Valle y Cundinamarca con 8% respectivamente. Bogotá aumentó drásticamente su participación con respecto al año anterior, cuando concentró el 3% del total de secuestros de menores de edad, mientras que Valle y Cundinamarca participaba con el 4%; les siguen Meta, y Antioquia con 7% cada uno.

Hay que resaltar finalmente que, a pesar de registrar una leve disminución en 2005, el número de secuestros realizados en zona urbana viene presentando una tendencia ascendente desde 2002, que se confirma en 2006 con 374 secuestros realizados en área urbana, mientras que 305 fueron cometidos en área rural. Este aumento de los secuestros en zona urbana puede tener explicación en el incremento del accionar de la delincuencia común y la subcontratación que los grupos armados irregulares han establecido con estas estructuras delincuenciales menores.



Fuente: Fondelibertad

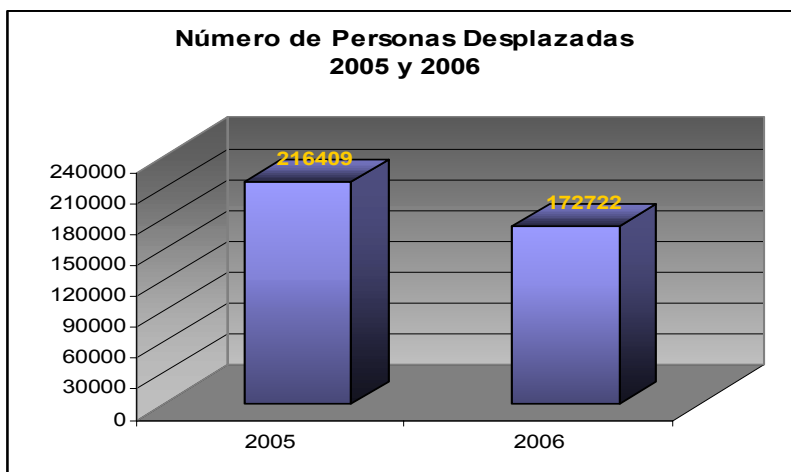
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.

DESPLAZAMIENTO FORZADO.

Según datos del Sur de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en el año 2006 se presentó, como se evidencia en la gráfica, un descenso de 20% en las cifras de personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado en el país, comparado con el año anterior.

En el mismo sentido, es importante destacar que, al comparar el año 2006 con 2005, en 25 departamentos del país se presentaron disminuciones en el

número de personas expulsadas, sin embargo en Caquetá, Cauca, Bogotá, Risaralda, Amazonas, Huila y Tolima se presentaron aumentos del 19% para el primer caso, de 10% para el segundo y tercero, de 8% para el cuarto y quinto caso y del 5% y 3% para los últimos dos departamentos. Así mismo, es importante mencionar que Antioquia, Caquetá, Bolívar, Tolima, Meta y Putumayo fueron los departamentos que más población expulsaron.



Fuente: Sur- Agencia Presidencial para la Acción Social.
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH.
Vicepresidencia de la República.

Número de personas desplazadas por departamento 2005 y 2006

Departamento Expulsor	2005	2006	Variación %	Departamento Expulsor	2005	2006	Variación %
ANTIOQUIA	29785	21331	-28%	LA GUAJIRA	6202	4279	-31%
CAQUETÁ	13435	15936	19%	ARAUCA	4956	3562	-28%
BOLIVAR	16100	13355	-17%	GUAVIARE	4875	3239	-34%
TOLIMA	11004	11293	3%	CALDAS	8216	2896	-65%
META	13426	11074	-18%	CUNDINAMARCA	3597	2447	-32%
PUTUMAYO	9390	9342	-1%	RISARALDA	1658	1789	8%
CESAR	12525	8468	-32%	BOYACÁ	1361	1230	-10%
NARIÑO	8648	7672	-11%	CASANARE	2892	1141	-61%
CAUCA	6728	7426	10%	VICHADA	857	552	-36%
NORTE DE SANTANDER	7019	6704	-4%	BOGOTÁ, D.C.	452	496	10%
MAGDALENA	9433	6159	-35%	QUINDIO	752	459	-39%
SUCRE	7067	5719	-19%	ATLÁNTICO	554	452	-18%
VALLE DEL CAUCA	5436	5167	-5%	GUAINÍA	529	245	-54%
HUILA	4701	4929	5%	VAUPÉS	460	183	-60%
CÓRDOBA	5519	4812	-13%	AMAZONAS	76	82	8%
CHOCÓ	9053	4580	-49%	SIN INFORMACION	4800	1311	-73%
SANTANDER	4903	4392	-10%	Total general	216409	172722	-20%

Fuente: Sur- Agencia Presidencial para la Acción Social.
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH.
Vicepresidencia de la República.

Caldas fue uno de los departamentos donde se presentó una de las mayores disminuciones en el número de personas expulsadas, pasando de 8.216 desplazamientos en 2005 a 2.896 en 2006, lo cual representa una disminución del 65%. La dinámica de Samaná fue importante en esta disminución, puesto que en 2005 representaba el 73% del total de personas desplazadas, debido a las amenazas que recibieron los pobladores del área rural de este municipio por parte del frente 47 de las Farc. La disminución de la cifra total en 2006 puede responder al aumento en el accionar de la Fuerza Pública en dicho municipio y al desarrollo de la operación "Reconquista", que tenía por objetivo combatir a este grupo guerrillero, lo que se tradujo en una merma del 15% en el número de personas expulsadas de este municipio caldense.

Por otra parte, en el departamento de Casanare también se presentó una importante reducción del 61%, al pasar de 2.892 personas desplazadas en 2005 a 1.141 en 2006, en particular en los municipios de Tauramena, Sacama, Hato Corozal y Maní. Esta variación se puede entender al observar la disminución del 74% en las acciones armadas ejecutadas por los grupos armados ilegales (frente José David Suárez del ELN, frente 28 de las Farc y nuevas bandas emergentes) presentes en la región. De la misma manera, en Chocó, se presentó una importante disminución, puesto que durante 2006 salieron 4.580 personas del departamento frente a 9.053 que lo hicieron en el año anterior; se destacan cambios en los municipios de Toribío, Totoro, Florencia y Caloto.

Por otra parte, el departamento de Caquetá mostró el mayor incremento en el número de personas desplazadas, pasando de 13.435 en 2005 a 15.936 en 2006. Los municipios que más población expulsaron fueron San Vicente del Caguán (2.946 personas), Cartagena del Chaira (2.201 personas), Puerto Rico (2.093 personas) y Florencia (1.755 personas), presentándose en todos incrementos superiores a 30%, con excepción del segundo, donde se redujo en 14%, con respecto al 2005. En estos municipios, la columna móvil Teófilo Forero y el frente 3 de las Farc intentan recuperar su presencia y dominio territorial después del debilitamiento que sufrieron por el incremento de la Fuerza Pública en la región en el marco de la operación *JM*.

El departamento del Cauca registró un aumento del 10% en el número de personas desplazadas, pasando de 6.728 en 2005 a 7.426 en 2006, siendo Patía, Bolívar, Argelia, Caloto y Páez los municipios donde se presentaron los incrementos más significativos. El Tambo fue el municipio que más personas expulsó durante 2006, sin embargo, presentó una disminución del 29% con respecto a 2005.

La capital, Bogotá, también mostró un aumento de 10% en el éxodo de personas durante el período analizado, pasando de 452 personas desplazadas en el primer año a 498 en 2006.

En materia de recepción de personas desplazadas, es de resaltar que, al comparar los dos periodos, se encuentra un aumento en Huila (50%), Risaralda (35%), Amazonas (29%), Cauca (22%), Caquetá (13%), Córdoba (12%), Norte de Santander (7%), Bogotá D.C (7%) y Cundinamarca (3%), mientras que en los demás departamentos disminuyó.

El aumento más significativo tuvo lugar en el departamento del Huila, donde se pasó de recibir a 5.840 personas por desplazamiento forzado en 2005 a 8.731 en 2006, lo que muestra una variación de 50%. Las personas desplazadas provenían, principalmente, de los departamentos de Caquetá (3.417), del mismo Huila (1972), Putumayo (824), Tolima (795) y Cauca (641), regiones donde se evidencia un aumento del accionar bélico por parte de la guerrilla, así como de los combates emprendidos por iniciativa de la Fuerza Pública.

Risaralda, por su parte, pasó de recibir 3.101 víctimas en 2005 a registrar 4.197 en 2006, provenientes de manera mayoritaria del mismo departamento, de Caldas, del Valle del Cauca, de Antioquia y de Chocó. De la misma forma, al departamento de Amazonas arribaron 29% más personas en 2006 que en 2005, la mayoría de ellas provenientes de Antioquia, Chocó, Caquetá, Meta y Cauca. En Cauca, se incrementó en 22% el número de personas recibidas, pasando de 4.560 en 2005 a 5.554 en 2006, originarios del mismo departamento, de Nariño, Putumayo, Caquetá y Valle del Cauca.

De otra parte, los departamentos de Vaupés, Caldas, Chocó, Magdalena, Arauca, Guainía y Meta mostraron disminuciones superiores al 40% en el número de personas que arribaron por desplazamiento forzado. Sin embargo, en términos absolutos, los departamentos que presentaron las bajas mas significativas en materia de recepción de población desplazada fueron Meta, pasando de 13.839 personas en 2005 a 7.565 en 2006; Magdalena que pasó de 7.013 a 2.457; Caldas con 6.343 personas en 2005 y 1.093 en 2006; y Chocó que registró una disminución de 5.764 a 1.438.

Número de personas desplazadas por departamento 2005 - 2006

Departamento receptor	2005	2006	%	Departamento receptor	2005	2006	%
BOGOTÁ, D.C.	24421	26146	7%	RISARALDA	3101	4197	35%
ANTIOQUIA	27491	18964	-31%	TOLIMA	4823	3283	-32%
BOLÍVAR	11754	8780	-25%	MAGDALENA	7013	2457	-65%
CAQUETÁ	7773	8759	13%	QUINDIO	2352	1728	-27%
HUILA	5840	8731	50%	GUAVIARE	1943	1633	-16%
VALLE DEL CAUCA	10046	7675	-24%	CASANARE	2344	1520	-35%
META	13839	7565	-45%	CHOCÓ	5764	1438	-75%
CESAR	9809	6850	-30%	ARAUCA	3159	1223	-61%
SUCRE	8703	6828	-22%	BOYACÁ	1136	1096	-4%
CÓRDOBA	5803	6477	12%	CALDAS	6343	1093	-83%
PUTUMAYO	6346	6276	-1%	GUAINÍA	766	321	-58%
SANTANDER	7513	6113	-19%	VICHADA	383	234	-39%
NORTE DE SANTANDER	5619	6034	7%	AMAZONAS	106	137	29%
ATLÁNTICO	7792	6012	-23%	VAUPÉS	298	49	-84%
NARIÑO	7736	5634	-27%	SIN INFORMACION	823	39	-95%
CAUCA	4560	5554	22%	SAN ANDRÉS, PR. Y S.C	1		-100%
CUNDINAMARCA	5275	5422	3%	Total general	216409	172722	-20%
LA GUAJIRA	5734	4454	-22%				

Fuente: Sur- Agencia Presidencial para la Acción Social.

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH.

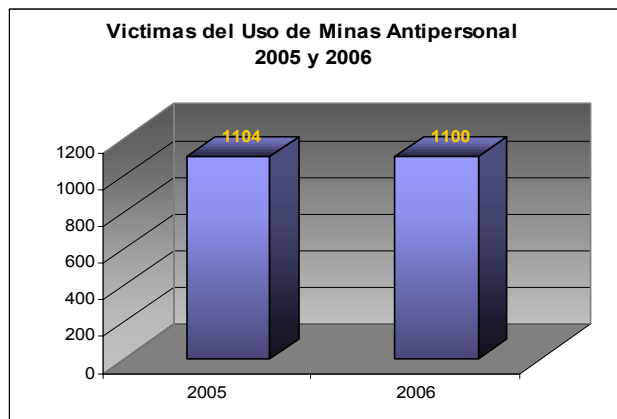
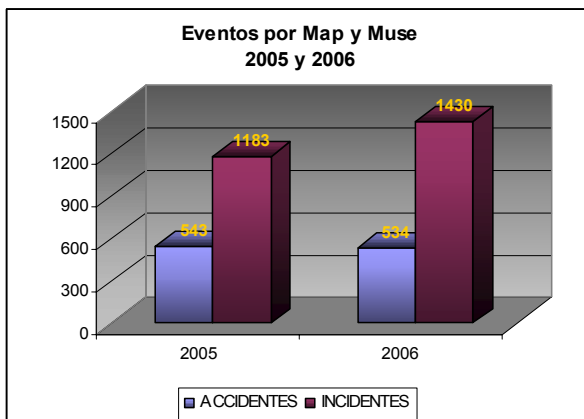
Vicepresidencia de la República.

En Meta, los municipios que presentaron notorias disminuciones fueron Villavicencio, Vistahermosa, Puerto Rico y Puerto Gaitán; en Magdalena, la ciudad de Santa Marta y los municipios de El Retén, Fundación, Ciénaga y El Banco registraron un descenso.

En Caldas, el municipio de Samaná presentó un descenso dramático en las cifras de recepción, causado posiblemente por el desplazamiento de la población que se presentó en el 2005, debido a las amenazas del frente 47 de las Farc. Cabe resaltar, así mismo, las reducciones en los municipios de Aguadas, Riosucio y Pensilvania.

Por último, en el departamento de Chocó, los municipios de Bajo Baudó, Bojayá, el Carmen del Darién, Condoto y Medio San Juan registraron una disminución del 100% en materia de recepción de población desplazada en 2006. En Riosucio y Nóvita, se redujo en más del 80% la recepción de personas.

MINAS ANTIPERSONAL (MAP) Y MUNICIONES ABANDONADAS SIN EXPLOTAR (MUSE). La situación por uso de minas antipersonal (Map) y municiones abandonadas sin explotar (Muse) se mide en Colombia según eventos y víctimas, de acuerdo con la información suministrada por el Observatorio de Minas Antipersonal del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.



Fuente: Observatorio de Minas antipersonal, Vicepresidencia de la República.

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.

En el año 2006, se registraron en el país 1.964 eventos por Map y Muse, de los cuales la mayoría se presentaron en el departamento de Meta (302), siendo los municipios de Vistahermosa, Puerto Rico, La Macarena, Mesetas y San Juan de Arama los más afectados. Antioquia (271), también concentró gran parte del total de los eventos, principalmente en Sonsón (que registró un aumento de 280%), Nariño, donde hubo un incremento del 525% y San Francisco, donde se redujo en un 62% el número de incidentes y accidentes. A pesar de que en el departamento de Bolívar acaecieron 145 eventos por Map y Muse, se hizo evidente un descenso del 46% en comparación con los eventos registrados en el año 2005.

Cabe anotar que se presentó un aumento del 14% en el total de los eventos con respecto al año anterior, cuando se presentaron 1.726 eventos. Tal variación se presentó debido un incremento del 21% en los incidentes¹¹, y más específicamente por un aumento del 56% en la incautación de minas adelantada por la Fuerza Pública.

De acuerdo con lo anterior, se puede anotar que de los 1.430 incidentes por Map y Muse registrados en 2006, el 49% consistió en casos de desminado militar, el 44% en incautación, el 6% en sospecha por campo minado y el 1% restante en producción de minas, municiones abandonadas sin explotar y desplazamiento forzado. Estos incidentes se concentraron en Antioquia (18%), en Meta (16%), Bolívar (8%), Tolima (7%), Caquetá (6% cada uno), Nariño y Caldas (5% cada uno) y Cauca (4%).

¹¹ Por incidente por Map y Muse se entiende "un acontecimiento relacionado con minas antipersonal, que puede aumentar hasta un accidente o que tiene el potencial para conducir a un accidente". Ver: Ver: Ley 759/02. Art. 1

En materia de accidentes¹², no ha habido una variación notable, puesto que tan sólo se registró un descenso de 2% en los accidentes por uso de minas antipersonal (543 accidentes en 2005 y 534 en 2006). Así mismo, se observa, un menor número de víctimas causadas por el uso de minas antipersonal, puesto que en 2006 se presentaron 1.100 víctimas mientras que en el 2005 fueron 1.104.

La mayoría de las personas afectadas por Map y Muse se registraron en Meta (169), principalmente, en los municipios de Vistahermosa, La Macarena, Puerto Gaitán y Puerto Rico; además este departamento registra el mayor número de víctimas civiles. Antioquia fue el segundo departamento más afectado (164), especialmente en Valdivia, San Luis, Sonsón, Yarumal y San Carlos. A pesar de la situación de estos dos departamentos, se debe resaltar que ambos registraron una disminución en el número de víctimas, en comparación con el año anterior.

El tercer departamento más afectado fue Norte de Santander, el cual a diferencia de los anteriores, registró un incremento de 29% en el número de víctimas. La mayoría de ellas fueron militares y se presentaron en los municipios de Teorema, Tibú, Hacarí y Convención. Este aumento en las víctimas que se presenta puede entenderse, teniendo en cuenta el incremento de 26% registrado en 2006 en cuanto a la intensidad de la confrontación armada en el departamento, que da cuenta tanto de los contactos armados emprendidos por la Fuerza Pública como las acciones bélicas de los grupos armados irregulares.

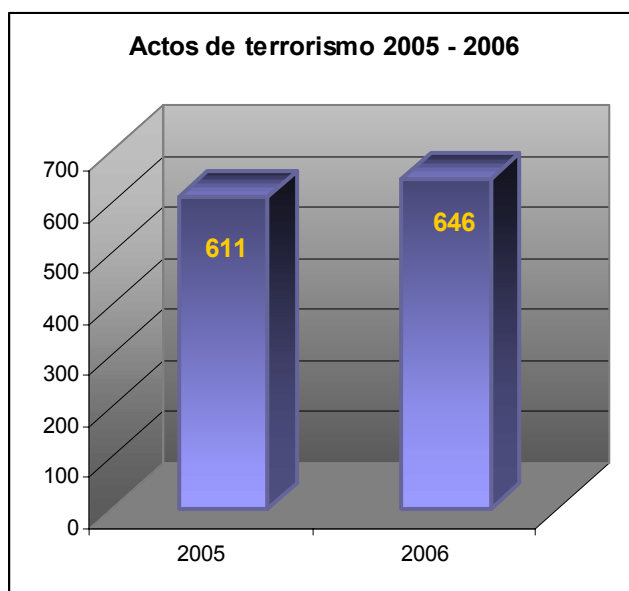
Cabe señalar que en el presente año hubo 311 víctimas civiles y 761 militares. Se observa además que del conjunto de víctimas de 2006, 870 resultaron heridas y 230 fallecieron, presentándose así un incremento del 6% en los heridos y una disminución del 18% en las personas que perecieron con respecto al año 2005.

Por último, cabe resaltar una disminución del 37% en el número de víctimas menores de 18 años por Map y Muse. Así mismo, se puede señalar que el 96% de las víctimas fueron hombres, el 3% mujeres y sobre el 1% restante se desconoce el sexo.

ACTOS DE TERRORISMO. Los actos de terrorismo, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, son aquellos hechos que provoquen o mantengan en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, o las edificaciones, o medios de comunicación, transporte, procesamiento o

¹² Por accidentes por Map y Muse, se entiende "un acontecimiento indeseado causado por minas antipersonal que genera daño físico y/o psicológico a una o más personas".

conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos. Según esta fuente, en 2006, se presentó un aumento de 6% con respecto al mismo período de 2005, al pasar de 611 actos de terrorismo en 2005 a 646 en 2006. A pesar de dicho aumento, si se compara esta última cifra con lo registrado en 2002, 2003 y 2004, el número de actos de terrorismo es inferior, puesto que se registraron 1.645 ataques, 1.257 y 724 respectivamente.



Fuente: Ministerio de Defensa
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH
Vicepresidencia de la República.

La mayoría de los actos de terrorismo se presentaron en Norte de Santander con 87 actos de terrorismo, que concentró el 13%, Valle con 75 ataques corresponde al 12%, seguido por Meta con 63 eventos que corresponde al 10%, Putumayo y Antioquia con 39 y 36 casos, que representan el 6% de los mismos, cada uno. De estos departamentos, los dos primeros presentaron aumentos significativos, al compararlo con el mismo periodo del año anterior.

Actos de Terrorismo por Departamento de Policía 2005 - 2006

Departamento	2005	2006	Variación %	Departamento	2005	2006	Variación %
Norte de Santander	53	87	64%	Cundinamarca	5	12	140%
Valle	39	75	92%	Risaralda	5	10	100%
Meta	54	63	17%	Atlantico	23	7	-70%
Putumayo	62	39	-37%	Boyaca	17	6	-65%
Antioquia	53	37	-30%	Casanare	9	6	-33%
Arauca	62	33	-47%	Cesar	5	5	0%
Nariño	16	32	100%	Choco	6	5	-17%
Tolima	20	30	50%	Guaviare	19	4	-79%
Huila	35	27	-23%	Cordoba	3	3	0%
Caqueta	26	26	0%	Quindio	16	3	-81%
Caldas	8	25	213%	Sucre	16	2	-88%
Cauca	15	25	67%	Vichada	0	2	100%
Bogota D.C.	11	21	91%	Amazonas	0	0	0%
Santander	9	17	89%	Guainia	0	0	0%
Guajira	3	16	433%	San Andres	0	0	0%
Magdalena	7	16	129%	Uraba	5	0	-100%
Bolivar	9	12	33%	Vaupes	0	0	0%

Fuente: Ministerio de Defensa
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH
Vicepresidencia de la República

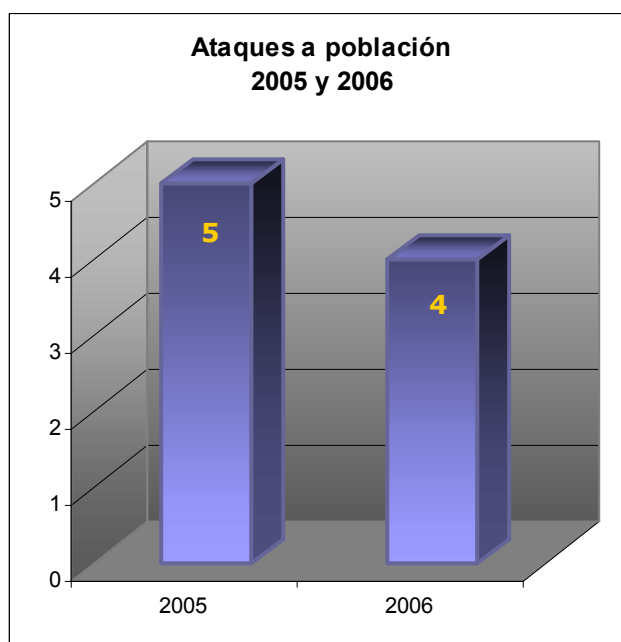
Los actos de terrorismo en el departamento de Norte de Santander, de acuerdo con la información del Das, se registraron con mayor frecuencia en la zona del Catatumbo, región en la que volvió a registrarse una alta actividad armada de las Farc desde 2005, después de la desmovilización del bloque Catatumbo de las autodefensas en diciembre de 2004. La estrategia de las Farc en el departamento, parece estar encaminada a realizar ataques que aunque no implican mayor despliegue de fuerza, sí generan un alto impacto dentro de la comunidad, en especial aquellos dirigidos contra la infraestructura pública.

En el caso del Valle, los actos de terrorismo aumentaron por el accionar de las milicias de las Farc, en Cali y Buenaventura, las cuales han tratado de desestabilizar la región y disminuir la confianza en la Fuerza Pública. En este último municipio, la disputa que se libra entre milicias de las Farc y desmovilizados de las autodefensas por las rutas del narcotráfico se ha evidenciado en actos de este tipo que han afectado tanto a civiles como a miembros de la Fuerza Pública.

Aunque la mayoría de estos eventos se concentraron en Norte de Santander y Valle, porcentualmente los mayores aumentos comparando el año 2005 con el

2006, se registraron en los departamentos de Guajira, Caldas, Cundinamarca, Magdalena y Nariño, como se observa en el cuadro anterior.

ATAQUES CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL. Se considera como ataque contra la población, a todo acto cometido por grupos armados al margen de la ley que atente contra la población civil, que no esté específicamente dirigido contra un objetivo militar y durante el cual se emplee medios o métodos de combate, cuyo efecto no sea posible limitar y que cause muertos y heridos entre la población civil, o daños considerables a bienes de carácter civil, o ambas cosas. En 2006, fueron perpetrados cuatro ataques a población, registrándose una disminución del 20% con respecto al año anterior.



Fuente: Ministerio de Defensa y Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH
Vicepresidencia de la República

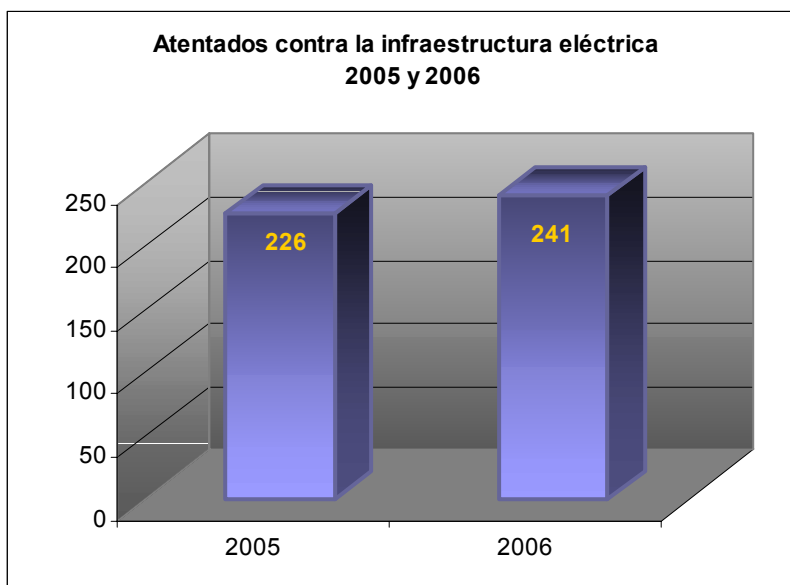
En 2005, el departamento del Cauca fue el más afectado, puesto que allí se registraron tres de los cinco ataques perpetrados, uno el 14 de abril en Toribío, donde guerrilleros de las Farc y el ELN incursionaron en el pueblo, destruyendo la estación de Policía, 15 viviendas y la sede del Banco Agrario; el segundo acaeció el 21 del mismo mes, cuando miembros de la columna móvil Jacobo Arenas y el frente 6 de las Farc atacaron Jambaló, la estación de Policía y la Iglesia y el último, el 3 de septiembre, en Caldon, cuando nuevamente la columna móvil Jacobo Arenas y el frente 6 de las Farc atacaron el municipio.

Los otros dos, fueron en Guachaves (Nariño), en abril y en San Miguel (Putumayo) en octubre.

En 2006, el primer ataque a población se registró el 4 de marzo, por parte de integrantes del frente 47 de las Farc, que incursionaron con explosivos y armas de fuego al corregimiento Montebonito del municipio de Marulanda (Caldas), destruyendo varias viviendas y asesinando a dos civiles, entre ellos un menor de ocho meses de edad y un agente de la Policía Nacional. En agosto, miembros de las Farc atacaron simultáneamente los municipios de Casabianca y Villahermosa (Tolima); en ambos municipios resultaron averiadas varias viviendas, robaron los bancos y fue asesinada una menor de edad en la primera localidad. Finalmente, en el corregimiento de Tierradentro en Montelíbano (Córdoba), más de 400 guerrilleros del frente 18 y 58 de las Farc, atacaron con cilindros bomba dicha población, en la cual 17 policías, 3 civiles y 11 guerrilleros resultaron muertos.

ATAQUES CONTRA LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

TORRES DE ENERGÍA DERRIBADAS: Según información suministrada por Isa, en 2006 se presentaron 241 ataques contra torres de energía, presentándose un aumento de 7% con respecto a 2005, cuando se registraron 226 ataques.



Fuente: Isa
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República

De los 241 ataques registrados, 147 fueron contra instalaciones de Isa, empresa que registró un aumento de 20% en el número de ataques contra su infraestructura comparado con el año 2005. A Isa, le siguen las Centrales Eléctricas de Norte de Santander con un aumento de 92%, Centrales Eléctricas del Cauca con un incremento de 55% y la Empresa de Energía del Pacífico, la cual a diferencia de las anteriores empresas registró una disminución de 36%.

Atentados contra la infraestructura energética por empresa afectada 2005 -2006

EMPRESA	2005	2006	Variación %
ISA	122	147	20%
Centrales Eléctricas de Norte Santander	12	23	92%
Centrales Eléctricas de Cauca	11	17	55%
Empresa de Energía del Pacífico S.A.	14	9	-36%
Ministerio de Minas y Energía	10	7	-30%
ENERTOLIMA		6	100%
Empresa de Energía de Bogotá	1	5	400%
Empresa Antioqueña de Energía	1	5	400%
Empresas Públicas de Medellín	8	4	-50%
ESSA		4	100%
Centrales Eléctricas de Nariño	9	3	-67%
Transelca	7	2	-71%
Centrales Eléctricas de Caldas		2	100%
Electrificadora del Caquetá	3	2	-33%
Electrificadora del Bajo Putumayo	5	2	-60%
Electrificadora del Huila		1	100%
Emp. Energía Eléctrica de Arauca S.A	13	1	-92%
DISPAC		1	100%
Electricaribe y Electrocosta	9		-100%
Termoflores	1		-100%
Total	226	241	7%

Teniendo en cuenta los atentados en contra de torres de energía tanto de Isa como de otras empresas, los departamentos más afectados fueron Cauca con 66 ataques, registrando un aumento de 247% con respecto a 2005, Norte de Santander con 45, Antioquia con 28 que registró una disminución de 44% y Tolima con 20 atentados. Es importante destacar el caso de Antioquia, departamento que históricamente había sido el más afectado por este tipo de atentados, los cuales han venido disminuyendo desde 2002, gracias a la mayor presencia del Ejército, que se ha visto reflejado en el aumento en el número de combates en la zona.

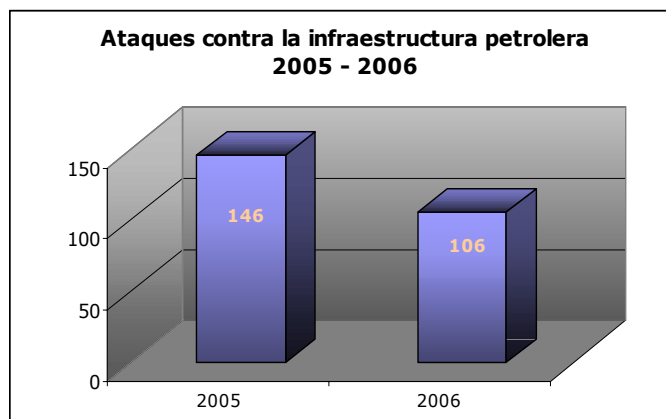
Sin embargo, el hecho de que la mayoría de los eventos se hayan registrado en extremos del país como Cauca, Norte de Santander y Antioquia, evidencia

que no existe una concentración de dichos actos en una región específica del país, por el contrario parece más una estrategia de dispersión de los grupos armados ilegales para aliviar la presión de la Fuerza Pública. Además, en zonas como Cauca y Norte de Santander, es claro que a pesar de los esfuerzos de la Fuerza Pública, las acciones de la guerrilla siguen superando los combates emprendidos por la Fuerza Pública, en especial por la ejecución de actos de terrorismo y ataques contra la infraestructura pública, eventos que no supone el despliegue de un gran número de hombres ni enfrentamiento directo con miembros de las Fuerzas Armadas.

Atentados contra la infraestructura energética por departamento 2005 -2006

DEPARTAMENTO	2005	2006	Variación %
Cauca	19	66	247%
Norte Santander	39	45	15%
Antioquia	50	28	-44%
Tolima	9	20	122%
Bolívar	11	18	64%
Valle	20	18	-10%
Putumayo	15	9	-40%
Chocó		6	100%
Cundinamarca	1	5	400%
Nariño	12	4	-67%
Guajira		4	100%
Huila		4	100%
Santander		4	100%
Sucre	3	3	0%
Arauca	27	2	-93%
Caquetá	3	2	-33%
Caldas		2	100%
Boyacá	2	1	-50%
Magdalena	2		-100%
Atlántico	7		-100%
No disponible	6		-100%
Total	226	241	7%

ATAQUES CONTRA LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA



Fuente: Ecopetrol

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.

Durante 2006, se produjeron 106 ataques contra la infraestructura petrolera, lo que demuestra una disminución de 27% respecto de los 146 ataques registrados en 2005.

La mayoría de los ataques de 2006 ocurrieron en los departamentos del Putumayo (65 ataques), Norte de Santander (18) y Nariño (14). Se destacan disminuciones del 33% y 18% en los dos primeros, y un incremento de 367% en el último, con respecto a 2005. En Putumayo, los actos fueron ejecutados en los municipios de Orito, Puerto Caicedo, San Miguel y Valle del Guamuéz, y en Nariño, los atentados ocurrieron en Puerres, Ricaurte y Tumaco; en los dos departamentos se encuentra ubicada la infraestructura petrolera de la Gerencia Sur de Ecopetrol (GSU). El alto número de atentados acaecidos en estos departamentos puede interpretarse como un intento por parte de los grupos guerrilleros, principalmente de las Farc, para desacreditar la Política de Defensa y Seguridad Democrática, sobre todo, aquellos esfuerzos llevados a cabo por las Fuerzas Militares en los departamentos del Caquetá, Meta y Guaviare, y para desconcentrar las acciones militares realizadas en dicha zona.¹³

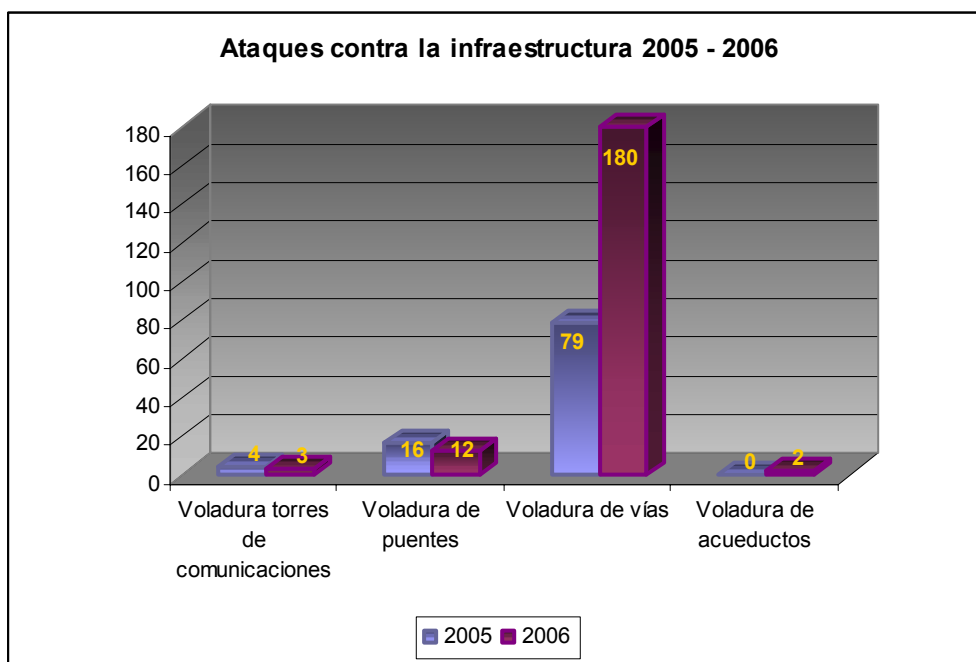
En Norte de Santander, los atentados dirigidos contra tramos del oleoducto Caño Limón-Coveñas que atraviesan los municipios de Teorama, Tibú, El Tarra, Convención y El Carmen, fueron perpetrados presuntamente por integrantes del frente 33 de las Farc, en el marco de una estrategia para contrarrestar las acciones de la Fuerza Pública en la región del Catatumbo, y así recuperar el dominio sobre la misma. El objetivo de tal estrategia es controlar recursos de alto valor en la confrontación armada como los cultivos

¹³ En 2006, se registraron 244 contactos armados entre las Farc y la Fuerza Pública en el departamento del Meta, 116 en Caquetá y 16 en Guaviare, que equivalen al 20% del total de combates a nivel nacional.

de coca que se encuentran en la zona y tener dominio sobre la frontera entre Colombia y Venezuela. Los demás ataques contra infraestructura petrolera cometidos en 2006 se presentaron en los departamentos de Arauca (5), Valle del Cauca (2), Bolívar (1) y Santander (1).

Por último, cabe señalar que la Gerencia Sur (GSU) de Ecopetrol sufrió el 64% (68) del total de los ataques, y dentro de ésta, el tramo más afectado fue el oleoducto San Miguel-Orito (GSU-OSO), con 26 atentados. El oleoducto Caño Limón-Coveñas, por su parte, fue el segundo más afectado al concentrar el 20% (21) del total de los ataques, mostrando una disminución del 16% con respecto a 2005.

ATAQUES CONTRA TORRES DE COMUNICACIÓN: En 2006, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Defensa Nacional, se presentaron 3 ataques contra torres de comunicación, registrándose una disminución de 25%, puesto que para el mismo periodo de 2005, se habían registrado cuatro ataques.



Fuente: Ministerio de Defensa
 Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH
 Vicepresidencia de la República

ATAQUES CONTRA PUENTES: En el año 2006, se registró una disminución del 25% en el número de ataques contra puentes, con respecto al año 2005, puesto que se pasó de 16 a 12 ataques entre los dos años.

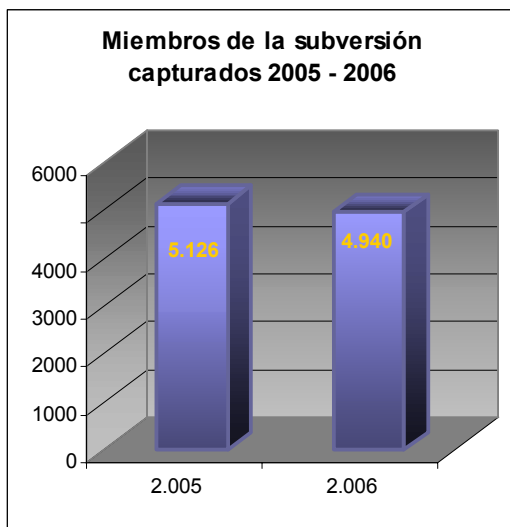
ATAQUES CONTRA VÍAS: A diferencia de los ataques contra torres de comunicaciones y puentes, los ataques contra vías aumentaron en 2006, puesto que se registraron 180 ataques, equivalentes a un aumento de 128% con respecto a 2005, año en el que se presentaron 79 eventos.

ATAQUES CONTRA ACUEDUCTOS: En cuanto a ataques contra acueductos, en 2006 se registraron dos casos, mientras que en 2005 no se habían presentado ningún evento de este tipo.

RESULTADOS OPERACIONALES DE LA FUERZA PÚBLICA

Contra la subversión

Según información suministrada por el Ministerio de Defensa, en 2006 fueron capturados por la Fuerza Pública 4.940 miembros de la subversión, registrándose una disminución del 4%, con respecto al año anterior, cuando se presentaron 5.126.

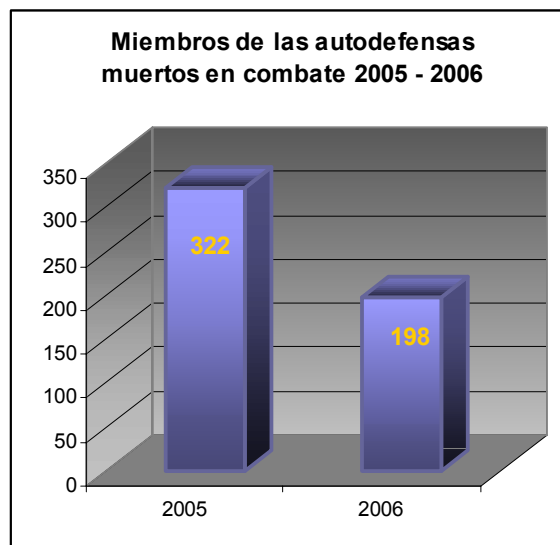
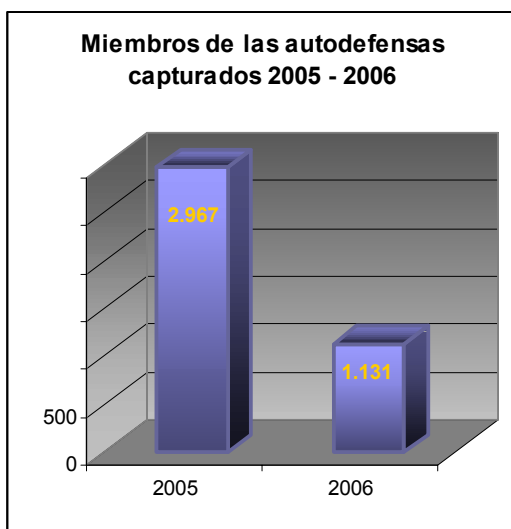


Fuente: Ministerio de Defensa
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH
Vicepresidencia de la República.

Con respecto a muertes en combates de miembros de la subversión, éstas aumentaron en 16%, al pasar de 1.870 en 2005 a 2.165 en 2006.

Contra los grupos de autodefensa

La Fuerza Pública capturó a 1.131 miembros de los grupos de autodefensa en el año 2006, 62% menos que lo registrado para el mismo periodo del año anterior, durante el cual fueron capturados 2.967.



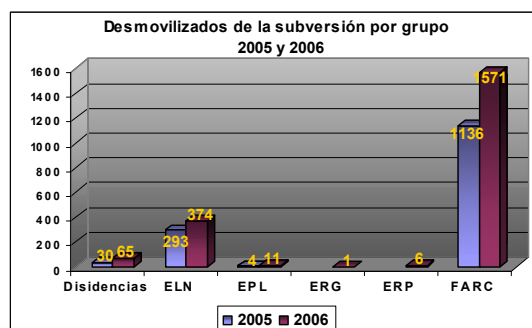
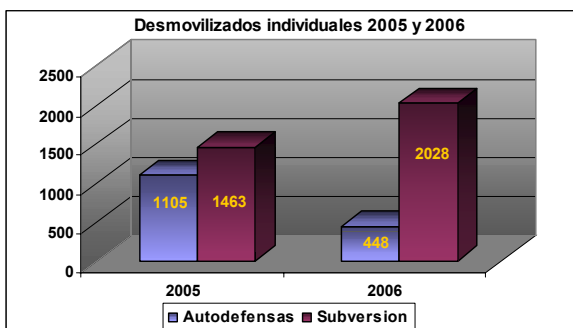
Fuente: Ministerio de Defensa

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.

Según información suministrada por el Ministerio de Defensa, para 2006 murieron en combate con la Fuerza Pública 198 miembros de los grupos de autodefensa, registrándose una disminución del 39% con respecto al mismo periodo de 2005, cuando se presentaron 322.

Estas disminuciones tanto en términos de capturas, como de muertes en combates están claramente relacionadas con el aumento en las desmovilizaciones masivas de este grupo ilegal que a marzo de 2006 completó la entrega de la mayoría de sus combatientes.

DESMOVILIZADOS. El Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD)¹⁴ del Ministerio de Defensa reporta, al comparar el número de desmovilizaciones individuales que se presentaron entre enero y diciembre de 2005 y 2006, una disminución del 4% en las desmovilizaciones individuales, puesto que para 2005 se presentaron 2.568 desmovilizaciones voluntarias, mientras que en 2006 se registraron 2.476.

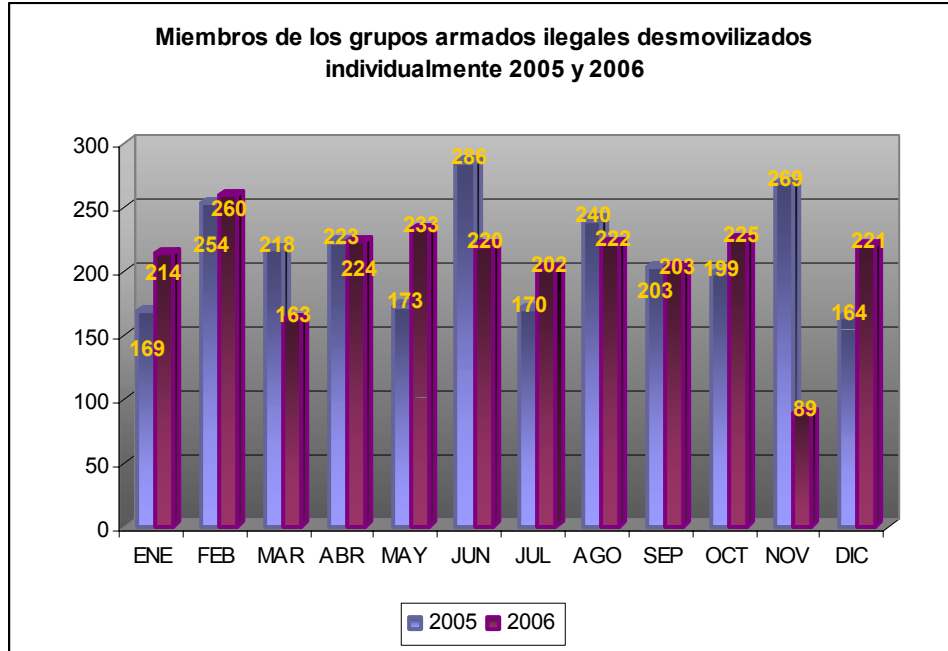


Fuente: PAHD, Ministerio de Defensa
 Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH
 Vicepresidencia de la República.

De las 2.476 desmovilizaciones registradas en el año 2006, 2.028 (82%) corresponden a personas vinculadas a la subversión, lo que representa un aumento de 39% en comparación con el mismo periodo del año 2005. Para el caso de las autodefensas, representan el 22%, lo cual equivale a una disminución de 59% en las desmovilizaciones voluntarias, puesto que la mayoría de sus integrantes se han acogido al proceso de paz adelantando por el Gobierno y se han desmovilizado colectivamente.

En cuanto a los desmovilizados de la subversión, todos los grupos registraron aumentos en comparación con el mismo periodo del año anterior. La mayoría de los desmovilizados individuales de la subversión fueron integrantes de las Farc (63%), seguidos por el ELN con el 15%. Así mismo, es importante resaltar la entrega voluntaria de 11 integrantes del EPL, lo cual llevó a la desintegración del frente Oscar William Calvo de dicha organización, quienes eran responsables de varios secuestros en la zona del Eje Cafetero. Así mismo se desmovilizaron 6 integrantes del frente Elizabeth Serpa de ERP que actuaban en Santander.

¹⁴ Las cifras de desmovilizaciones individuales se están cotejando con PAHD, al presentarse una diferencia mínima en los datos para el año 2006.



Fuente: PAHD, Ministerio de Defensa
 Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH
 Vicepresidencia de la República.

Los departamentos y distritos capitales, con mayor número de desmovilizaciones voluntarias en el año 2006, fueron Bogotá con 401 desmovilizados, que representan el 16% del total nacional para este periodo, seguido por Antioquia con 294 desmovilizaciones, que representa el 12% del total, Caquetá con 193 (8%), Meta con 176 (7%) y Nariño 137 (6%). Para el caso de Antioquia, Meta, Caquetá y Tolima coincide con un incremento en el número de combates en estos departamentos por iniciativa de la Fuerza Pública, lo cual parece haber incidido en el aumento en el número de desmovilizaciones. De acuerdo con la base de intensidad de la confrontación de los boletines diarios del Das, en estos departamentos se concentró el 43% del total de los combates librados por la Fuerza Pública durante 2006: 18% en Antioquia, 13% en Meta, 6% en Caquetá y 6% en Tolima.

Desmovilizaciones individuales por Departamento Enero – septiembre de 2005 y 2006

DEPARTAMENTO	2005	2006	VARIACION	DEPARTAMENTO	2005	2006	VARIACION
AMAZONAS		3	100	GUAVIARE	84	56	-33
ANTIOQUIA	364	294	-19	HUILA	46	44	-4
ARAUCA	119	76	-36	LA GUAJIRA	23	29	26
ATLANTICO	25	25	0	MAGDALENA	53	33	-38
BOLIVAR	74	58	-22	META	170	176	4
BOYACA	78	45	-42	NARIÑO	58	137	136
CALDAS	20	53	165	NORTE DE SANTANDER	76	36	-53
CAQUETA	264	193	-27	PUTUMAYO	44	76	73
CASANARE	187	69	-63	QUINDIO	14	24	71
CAUCA	69	115	67	RISARALDA	27	33	22
CESAR	54	96	78	SANTANDER	139	75	-46
CHOCO	21	19	-10	SUCRE	21	30	43
CORDOBA	7	10	43	TOLIMA	102	120	18
CUNDINAMARCA	27	45	67	VALLE	106	56	-47
DISTRITO CAPITAL	224	419	87	VAUPES	5	2	-60
GUAINIA	8	18	125	VICHADA	59	11	-81

Fuente: PAHD, Ministerio de Defensa

Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH
Vicepresidencia de la República

Así mismo, en los departamentos donde se registraron aumentos en el número de desmovilizaciones, se presentaron aumentos en el número de combates, al comparar el año 2005 con el 2006, como es el caso de Caldas, Cauca, Córdoba, Nariño, Putumayo y Tolima.

Al comparar el mismo periodo de 2005 y 2006, se evidencia un aumento en la participación porcentual de menores de edad que dejaron las filas de los grupos armados, al pasar del 14% en el primer año a 17% en el segundo. Lo mismo ocurre en el caso de las mujeres, cuyo porcentaje se incrementó de 13% en 2005 a 17% en 2006. De acuerdo con lo registrado en 2006, el nivel de educación de los desmovilizados es bastante bajo, puesto que el 16% de ellos son analfabetas, el 42% no culminaron la primaria, el 14% apenas completaron el ciclo de básica primaria y el 19% restante terminó la secundaria.

De otro lado, producto de las negociaciones de paz que el Gobierno nacional adelantó con grupos de autodefensas, en el año 2006, se han desmovilizado colectivamente 17.581 integrantes de las autodefensas, siendo las últimas las estructuras del bloque Elmer Cárdenas en tres fases de desmovilización.

Desmovilizaciones colectivas de grupos de autodefensas en 2006

Frente o Bloque	Número de Hombres	Fecha
Bloque Mineros	2790	Enero 20 de 2006
Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá	742	Enero 28 de 2006
Bloque Central Bolívar, Sur de Bolívar	2523	Enero 31 de 2006
Bloque Resistencia Tayrona	1166	Febrero 3 de 2006
Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio	990	Febrero 7 de 2006
Frente Próceres del Caquetá, Héroes de Andequés y Héroes de Florencia del BCB	552	Febrero 15 de 2006
Frente Sur Putumayo del BCB	504	Marzo 1 de 2006
Frente Julio Peinado Becerra del las AUC	251	Marzo 4 de 2006
Bloque Norte de las Autodefensas	4760	Marzo 8 y 10 de 2006
Frente Héroes del Llano y Héroes del Guaviare	1765	Abril 11 de 2006
Primera fase desmovilización Bloque Elmer Cárdenas	309	Abril 11 y 12 de 2006
Segunda fase desmovilización Bloque Elmer Cárdenas	484	Abril 30 de 2006
Tercera fase desmovilización Bloque Elmer Cárdenas	745	Agosto 15 de 2006
TOTAL	17581	

Fuente: Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH
Vicepresidencia de la República

CIFRAS SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y RESULTADOS OPERACIONALES DE LA
FUERZA PÚBLICA
Comparativo Enero - diciembre 2005 y 2006

	ENE - DIC 2005	ENE - DIC 2006	Variación en el periodo
Homicidios	18.111	17.479	-3%
Víctimas de masacres	252	193	-23%
Casos de masacres	48	37	-23%
Homicidios de Alcaldes y exalcaldes	6	5	-17%
Homicidios de Concejales	26	23	-12%
Homicidios de Indígenas	49	44	-10%
Homicidios sindicalistas	14	25	79%
Homicidios de Maestros Sindicalizados	26	33	27%
Homicidios de Maestros No Sindicalizados	17	20	18%
Homicidios de Periodistas	2	3	50%
Secuestro	800	687	-14%
Desplazamiento Forzado	216.409	201.623	-7%
Eventos por MAP y MASE	1.726	1.964	14%
Civiles Heridos por MAP y MASE	261	252	-3%
Civiles muertos por MAP y MASE	78	59	-24%
Militares Heridos por MAP y MASE	560	617	10%
Militares Muertos por MAP y MASE	201	170	-15%
Ataques a poblaciones	5	4	-20%
Ataques contra torres de comunicaciones	4	3	-25%
Ataques contra torres de energía	226	241	7%
Ataques contra la infraestructura petrolera	155	106	-32%
Ataques contra puentes	16	12	-25%
Ataques contra vías	79	180	128%
Ataques a acueductos	0	2	100%
Actos de Terrorismo	611	646	6%
Miembros de los grupos de autodefensas desmovilizados	1.096	494	-55%
Miembros de la subversión desmovilizados	1.468	1.966	34%
Miembros de grupos de autodefensa muertos en combate por la Fuerza Pública	322	198	-39%
Miembros de grupos de autodefensa capturados	2.967	1.131	-62%
Subversivos muertos en combate	1.870	2.165	16%
Subversivos capturados por la Fuerza Pública	5.126	4.940	-4%